

MANUEL CASTELLS

GLOBALIZACIÓN,
DESARROLLO Y
DEMOCRACIA: CHILE
EN EL CONTEXTO
MUNDIAL



FONDO DE CULTURA ECONÓMICA

MÉXICO - ARGENTINA - BRASIL - COLOMBIA - CHILE - ESPAÑA
ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA - GUATEMALA - PERÚ - VENEZUELA

II. AMÉRICA LATINA A PRINCIPIOS DEL SIGLO XXI

La problemática latinoamericana a principios del siglo XXI puede estructurarse en torno a su relación específica con el informacionalismo globalizado, las identidades, los movimientos sociales y el Estado (Calderón, coordinador, 2003).

INFORMACIONALISMO Y GLOBALIZACIÓN EN AMÉRICA LATINA

La transición al informacionalismo, expresada mediante la globalización, ha transformado profundamente las economías y las sociedades en toda América Latina. En su dimensión fundamental, la financiera y monetaria, la globalización y las políticas de ajuste que de ella derivan han inducido un nuevo marco macroeconómico, afirmando la estabilidad monetaria y el control de la inflación como objetivo prioritario, la liberalización del mercado de capitales, la desregulación económica y la privatización de empresas públicas en casi todos los países. En ese sentido las políticas económicas

latinoamericanas en la década de los noventa se guiaron por el criterio de aproximación a los parámetros de las economías más avanzadas, creando las condiciones para una relativa homogenización de las condiciones de inversión de capital y para el libre movimiento de mercancías. Y eso es lo esencial de la globalización económica: la unificación de criterios de mercado en un espacio económico ampliado. La inversión extranjera, tanto directa como en el mercado de valores, se ha multiplicado, proporcionando recursos para el crecimiento económico y favoreciendo transferencia de tecnología y mejora de la gestión empresarial. El comercio internacional se ha diversificado por sectores y por regiones del mundo. Y se ha dinamizado, en calidad y en cantidad. El Tratado de Libre Comercio de las Américas y, en un primer momento, Mercosur, han constituido áreas económicas relativamente integradas que amplían mercados y contribuyen a mejorar la competitividad. Pero este proyecto de modernización ligado a una globalización capitalista con escaso control social, tiene dos problemas fundamentales desde una perspectiva latinoamericana (Castro, coordinadora, 2003). El primero, su débil capacidad productiva y competitiva en una economía mundial en la que la creación de valor depende sustancialmente de la capacidad tecnológica, organizativa y cultural de producir conocimiento y procesar información eficazmente. El segundo, la incapacidad de integrar en el desarrollo económico a la mayoría de la población del continente, una buena parte de la cual se ve abocada a un proceso

de marginación creciente. Veamos las contradicciones del modelo que se dio en llamar neoliberal.

Desde el punto de vista económico, el punto débil de América Latina continúa siendo su débil inserción en el modelo de producción informacional, debido a la falta de flexibilidad organizativa de las empresas y a la baja capacidad tecnológica de la mayoría de sus sectores de actividad, tanto en generación como en uso de nuevas tecnologías (Katz y Hilbert, 2003). Ello implica que la mayor parte de las exportaciones en la década de los noventa, en todos los países menos Brasil, corresponde aún a productos agropecuarios, materias primas y productos extractivos. La exportación de productos manufacturados, en todos los países, sigue concentrándose en los sectores de menor valor añadido (Moguillansky, 1999; 2003). O, en el caso de México, en donde las exportaciones manufactureras han crecido considerablemente, se trata de trasplantes productivos de empresas multinacionales, con escasa autonomía de innovación y crecientemente expuestas a la deslocalización de actividades hacia áreas de menores costos de producción. Las exportaciones de servicios continúan también mayoritariamente en las líneas tradicionales, como turismo (generalmente controlado por tour-operators globales), con escasa competitividad en los servicios a las empresas, y en las actividades de alto crecimiento y de alto valor añadido. Una nueva dependencia, la tecnológica, marca la nueva economía latinoamericana en un momento decisivo de su articulación a la economía global. Es cierto que puede concebirse un desarrollo

tecnológico que se traduzca en aumento de exportaciones primarias utilizando una clasificación estadística desfasada. Así la economía exportadora estrella de los noventa, la chilena, sigue concentrando sus exportaciones, en buena medida, en la minería y en la línea agro-acuo-alimentaria. Y la utilización de tecnología avanzada, tanto biológica como de gestión informatizada, ha sido importante en la competitividad de las empresas más dinámicas del sector exportador en Chile, en Brasil o en Costa Rica. Pero la modernización tecnológica y la capacidad de innovación, aun progresando en algunos países como Chile, han ido acumulando retraso con respecto a los procesos de cambio tecnológico y organizativo en los países más avanzados, como expondré más adelante en lo referente a Chile.

Con todo, en su conjunto, América Latina está integrada en la nueva economía global. Pero de forma desigual y tal vez insostenible, con altos costos sociales y económicos en la transición, y con amplios sectores sociales y territorios excluidos estructuralmente de ese proceso de modernización e integración económicas (Cepal, 2004; Calderón, coordinador, 2003). Los índices de desempleo, pobreza y desigualdad varían, pero con excepción de Costa Rica y Chile (que ha reducido notablemente su nivel de pobreza, en parte por comparación con la situación de marginación masiva heredada de Pinochet) han aumentado en el conjunto de América Latina a lo largo de la década. El desarrollo desigual territorial se ha acentuado y la concentración de población y recursos en las grandes áreas metropolitanas

sigue creciendo, suscitando tensiones sociales y deficiente medioambiental por falta de control y planeamiento de este proceso de urbanización acelerada, que ha llevado ya a las ciudades y sus entornos rural-urbanos a casi un 80% de la población latinoamericana. Se observa una distancia creciente entre el sector moderno, globalizado, de la economía y el sector informal y de economía de supervivencia en el que trabaja una alta proporción de la población, más de la mitad en muchos países. Si la marginalidad urbana era un mito cuando se formuló su teoría en los sesenta (puesto que la mayor parte de los llamados marginales urbanos estaban integrados en la economía formal) en estos momentos sí es una realidad masiva. Esta marginación de una buena parte de la población latinoamericana excluida de la economía formal resulta de la contraposición de dos dinámicas contrapuestas: la articulación global del sector competitivo en base a menores costos de producción y la supervivencia informal en las economías locales. En parte ello se debe a la descomposición/recomposición de la economía por los costos del ajuste macroeconómico, que ha desintegrado sectores protegidos de la empresa pública y ha estrangulado a numerosas pequeñas y medianas empresas por las altas tasas de interés, generando así paro estructural y no sólo sub-empleo. Junto a ello, las altas tasas de crecimiento económico en algunos sectores y en algunos territorios han generado un amplio estrato medio-alto urbano de nuevo tipo, ligado a la empresa privada, con

niveles de educación, sofisticación profesional y patrones de consumo homologables a los estadounidenses y europeos.

La crisis de amplios sectores de la población y de muchas regiones creó las condiciones para su utilización por parte de las mafias globales, produciéndose lo que denominé hace algún tiempo la conexión perversa, es decir la reconexión de sectores marginados de población y de regiones enteras con la economía mundial, mediante actividades criminales de todo tipo (centradas en el tráfico de drogas, en el contrabando y en el lavado de dinero) que encuentran mercados en expansión en las sociedades más ricas pero también en las sociedades latinoamericanas, por ejemplo en Brasil y México. La economía global criminal se ha convertido en un sector dinámico, generador de riqueza y empleo, pero también destructivo de personas e inductor de inestabilidad social y política, en varios países de la región.

La dinámica de la globalización y la aceleración del crecimiento económico, incontrolado y espoleado por la búsqueda constante de competitividad, han conducido a una destrucción masiva del medio ambiente. Tanto en áreas rurales como en las periferias de las grandes metrópolis se está produciendo un deterioro irreversible del equilibrio ambiental que amenaza con degenerar en desastre ecológico.

En suma, América Latina está, de lleno, en la globalización. En un proceso de crecimiento dinámico, competitivo y modernizador, del que forman parte, hoy por

hoy indisoluble, procesos de exclusión social y destrucción medioambiental.

La articulación asimétrica de América Latina en la economía global induce profundos cambios sociales, culturales y políticos según procesos específicos de cada país.

LA (RE) CONSTRUCCIÓN DE IDENTIDADES EN AMÉRICA LATINA

¿Cómo se relaciona el proceso de globalización trunca-da con la evolución de las identidades colectivas en América Latina? Cabe distinguir, aunque coexistan de forma articulada, cuatro principales identidades distintas: la étnica, la religiosa, la regional, la nacional. La étnica se ha manifestado fuertemente en la última década, de Chiapas, Guatemala y Bolivia, al Amazonas, a Ecuador, a Perú y al resurgir de las reivindicaciones mapuches. Para países como Guatemala, Ecuador y Bolivia es un principio fundamental de identidad, aun fraccionado, como en Bolivia, en distintas culturas. Para la mayoría de países latinoamericanos es una identidad específica de comunidades que son minoritarias y frecuentemente marginadas. Pero, aun siendo minoritarias, se han constituido en principios de movilización que se han hecho fuertemente presentes en la dinámica social de casi todas las sociedades latinoamericanas, con excepción de la Argentina, donde el genocidio de los indígenas fue llevado a cabo con gran eficacia. En algunos países como Bolivia o Ecuador, la

identidad indígena es hoy día un factor definitorio de la política nacional.

La identidad religiosa se mantiene como elemento básico de sentido para una buena parte de la población, en particular entre los más humildes, mediante la pervivencia de la influencia de la Iglesia católica. Pero el catolicismo ha ido perdiendo terreno con respecto al auge creciente de los cultos evangélicos, que constituyen un elemento de agregación y organización social en las comunidades urbanas, sobre todo en los sectores más populares, en toda América Latina, con especial presencia en América Central, en Chile, en Perú y en Brasil, país este en el que la influencia política de los evangélicos es creciente y llega al gobierno de Río. Su líder político carioca, Garotinho, alberga serias aspiraciones presidenciales hacia el futuro.

La identidad regional también se ha manifestado con más fuerza en el espacio público en la última década, marcando comunidades más allá de la cotidianidad y el costumbrismo. Las culturas regionales colombianas, de Antioquia al Cauca, son principios definitorios de redes de protección social ante la crisis general del Estado colombiano. El norte mexicano encuentra su identidad reforzada por su carácter de polo dinámico del nuevo espacio económico, al tiempo que Yucatán, Oaxaca y Chiapas buscan principios de movilización identitaria en su lucha contra una marginación creciente. La crisis del Estado peruano ha acentuado el fraccionamiento político regional a partir de un resurgimiento de las culturas propias de cada área del país. La

divisoria entre sierra y litoral en Ecuador es una clave esencial en la desagregación del sistema político tradicional en ese país. Y aunque la identidad étnica es un principio de organización y conflicto en Bolivia, a ello se añade la fuerte diferenciación regional del país, de modo que el Oriente boliviano vuelve a afirmarse como un polo alternativo a la dinámica político-social propia del altiplano.

Ahora bien, a pesar de la diversidad cultural interna en cada país *a lo largo del siglo pasado (o sea, el XX), el principio identitario dominante en toda América Latina ha sido la identidad nacional*. Era una identidad proyectada como la argentina por ejemplo, una identidad construida en torno a un Estado-nación que, ya sea sobre bases populistas o clientelares, afirmaba un proyecto de desarrollo y una especificidad a la vez frente a los países poderosos (aun sirviéndolos en lo político y en lo económico, pero nunca en lo cultural, véase México-EE.UU.) y frente a los vecinos, siempre sospechosos de algún mal designio. El Estado construyó la nación y la identidad nacional apareció como la principal fuente de identidad colectiva, articulada en lo privado a la identidad religiosa y en lo público a la identidad política —directamente inspirada por el Estado (justicialismo, priísmo, varguismo, fraccionamiento atroz entre identidades liberales y conservadora en Colombia).

Pues bien, *en la medida en que el Estado se constituyó en los noventa como agente de la globalización y en la medida en que se despegó de sus bases sociales tradicionales, la separación entre Estado y nación llevó a una crisis*

de la identidad nacional como principio de cohesión social. Con una identidad nacional construida históricamente por el Estado, al desligarse dicha identidad de su sujeto (el Estado), para la mayoría de la población la identidad nacional se ha convertido en un principio débil, en un principio que no basta para construir el sentido de la vida colectiva. La identidad nacional tiene de a ser suplantada por dos fuentes distintas de sentido. Por un lado, el individualismo (incluido el familismo), legitimado por el mercado, se convierte en fuente de racionalidad y de proyecto. Por otro lado, el repliegue hacia identidades comunitarias más fuertes que una identidad nacional en crisis, lleva hacia un resurgir religioso y hacia el renacimiento de las identidades étnicas y regionales para quienes no las han perdido. Ahora bien, para la mayoría de la población latinoamericana, pareciera que la tendencia dominante fuese la de constituir una comunidad cultural defensiva sobre base territorial como apoyo de estrategias de supervivencia individual. No se observa, en general, el surgimiento de un principio identitario unificador que llene la orfandad de una nación abandonada por su Estado.

CRISIS, RECONSTRUCCIÓN Y TRANSFORMACIÓN DEL ESTADO EN AMÉRICA LATINA

La evolución del Estado parece ser la clave de la crisis y/o reconstrucción de la identidad en América Latina. ¿Qué está sucediendo?

Aunque es arbitrario hablar en general del Estado en América Latina me atreveré a formular una hipótesis. Fue, históricamente, un Estado débil que, desde los años treinta, construyó su permanencia en base a una alianza con los sectores medios urbanos y con los trabajadores organizados. Sobre esta alianza se construyó un Estado populista (prismo, vanguardismo, justicialismo) o democrático (Chile, Venezuela, Colombia), pero siempre clientelista. Siempre dependiente de su capacidad para captar la riqueza del país, pagar su cuota a los socios extranjeros y distribuir los recursos al sector urbano organizado, mediante la administración pública, mediante las empresas públicas y mediante un Estado de bienestar hecho a la medida de las clientelas políticas. Al margen quedaban los campesinos y los sectores populares no organizados, así como, en algunos Estados, los sectores capitalistas autónomos (grupo Monterrey en México). Sólo las repúblicas centroamericanas (pero no Costa Rica) y Paraguay, corresponden al cliché del Estado instrumento directo y exclusivo de la oligarquía. La política cepalina fue el modelo económico adaptado a las condiciones políticas de ese Estado nacional-popular. Cada vez que se intentó romper ese equilibrio de alianzas entre sectores populares organizados, clases medias burocráticas y grupos económicos dominantes como capitalistas pero no como actores sociales, se produjo una crisis del Estado (Argentina en los cincuenta, Brasil en los sesenta, Chile en los setenta, México en los ochenta). Sólo se consiguió una estabilidad relativa cuando de alguna manera, explícita o implícita, dichas

alianzas se recompusieron. Pero en los noventa, para superar la crisis estructural de los ochenta, el Estado intentó asumir *un nuevo papel: el de modernizador en el marco de la globalización*. Es un papel contradictorio porque, a diferencia del Estado desarrollista, la modernización como adaptación a la economía global consiste sobre todo en traspasar al mercado lo que era del Estado. Para llevar a cabo ese proyecto, indispensable para la modernización tecnológica y la participación del sector dinámico de la economía en el nuevo capitalismo global, los Estados utilizaron con frecuencia sus apoyos tradicionales para, de hecho, romper los privilegios de dichos sectores y dejarlos expuestos a la competitividad. Del Estado nacional-popular se pasó al Estado neoliberal. Esa fue la política de Pinochet, en su versión autoritaria; la política de Salinas y luego de Zedillo y Fox (pese a las diferencias de aparatos políticos), la política de Menem, la política de Sánchez de Lozada, la política de Fujimori. La política de Cardoso correspondió a ese esquema en sus objetivos, pero no en sus apoyos políticos. Para sentar las bases de una política liberal, Cardoso buscó apoyos de centro-derecha, enfrentándose de hecho a la coalición de centro-izquierda que representó los intereses del sector popular clientelista del Estado. Este proyecto de adaptación a la nueva economía global tuvo una conducción política en distintas versiones. Algunos gobiernos, como el de Cardoso, lo hicieron con sensibilidad social y respeto democrático. Otros, como Fujimori, de forma autoritaria. Otros, como el de Menem, mediante el sostenimiento

artificial de la economía a través de la venta del patrimonio nacional, junto con la compra de complicidades políticas mediante la corrupción generalizada. Otros, como en México, profundizando la exclusión social al dar prioridad absoluta a la integración en la economía norteamericana. Pero en todos los casos se desmontó buena parte del sistema de alianzas en torno al Estado del que dependían las clases medias urbanas tradicionales y los sectores obreros organizados. Aún así, los gobiernos modernizadores ganaron elecciones en aquellos países (Argentina, Brasil) en que para la mayoría de la población las condiciones de vida mejoraron (pese al aumento de la desigualdad) y la inserción en el sistema global ofreció una perspectiva. Pero eso sólo duró mientras duró esa mejora de condiciones sociales y se convirtió en debate electoral y política, como en Argentina, en cuanto se reveló la fragilidad del proceso. Allá donde los sectores agrupados en torno al Estado fueron suficientemente fuertes para frenar la liberalización (Ecuador, Colombia y, sobre todo, Venezuela) se caotizó la economía entre medidas formalmente liberales para consumo externo y el mantenimiento de los intereses corporativos en torno a la economía pública. En México, el proceso fue más complicado en la medida en que las clases medias urbanas rompieron con el PRI, mientras que los sectores populares organizados decidieron apostar a una nueva ronda de clientelismo mientras pudiese durar. No duró mucho y el Estado PRI empezó su descomposición (aunque está lejos de haber terminado su recorrido histórico, en la medida en que

el PRI mantiene vivas sus redes de clientela y articulación de intereses). Pero el resultado generalizado en América Latina fue la quiebra del Estado corporativo y/o clientelista, la ruptura de las alianzas sociales, la fragmentación del sistema político y la recomposición de la dirección política en torno a liderazgos personalizados democráticos (es decir, refrendados por procesos electorales). En el caso más extremo, en Venezuela, la corrupción generalizada de la clase política venezolana y su intento de aferrarse al Estado clientelar llevó a la crisis general de ese Estado y al surgimiento de un régimen nacional-populista de nuevo tipo. Los reiterados plebiscitos populares en favor de Chávez, expresan un populismo que, a diferencia de los demás gobiernos, planteó una alternativa nacionalista radical a la globalización, abriendo así un proceso cuyo desarrollo y desenlace todavía abiertos están llenos de significación y dramatismo. Allá donde la clase política osciló entre el salto adelante de la liberalización y el mantenimiento del Estado tradicional, como en Colombia, el Estado entró en descomposición, momento que pudo ser aprovechado por fuerzas insurreccionales que habían mantenido una resistencia testimonial en nombre de los marginados de siempre. En el contexto de la economía criminal y del intervencionismo estadounidense, el proceso desembocó en guerra civil abierta. Por otro lado, la profundidad de la crisis crea condiciones para una reacción de la sociedad y un último reflejo del sistema político para restablecer su legitimidad in extremis. Tal ha sido el caso de Argentina, donde Kirchner pudo

apoyarse en una sociedad al borde del colapso para enfrentarse a los fantasmas del pasado, a la podredumbre de las instituciones políticas, judiciales y militares y a las presiones del Fondo Monetario Internacional, con una determinación impensable poco tiempo antes. El resultado fue, al menos por un periodo, la estabilización de la economía y la relegitimación de la institución presidencial, en un claro ejemplo de la autonomía de los sujetos políticos con respecto a las determinaciones estructurales. Asimismo la elección de Lula representó la demanda de la sociedad brasileña para no ser postergada por más tiempo en aras de la reforma económica. El programa de Lula se presentó, ante todo, como la defensa de la nación. Y esa es precisamente la contradicción que domina su gestión: cómo mantenerse en la globalización (y por tanto en el marco de la política del FMI) al tiempo que se afirman los intereses nacionales y los intereses de trabajadores sindicalizados y empleados del sector público, su principal base de apoyo.

En resumen, el Estado-nación latinoamericano dejó de ser nacional en la década de los noventa, con la excepción de Chile, Costa Rica y Brasil. Pero aun en estos casos, sus condicionamientos globales contaron tanto como sus legitimidades nacionales. Como consecuencia, en la mayoría de los países, se rompió la alianza tradicional con los sectores medios urbanos y sectores populares organizados, que son aún la base del sistema político latinoamericano. Ello condujo a la recomposición del sistema político de representación y liderazgo,

y a la creación de una política dependiente de personalidades y de una relación mediática con las masas populares. Un populismo mediático agente de la globalización contrapuesto a un estatismo corporativo defensor de la nación son los dos proyectos en competencia y en busca de apoyos sociales. Entre ambos, la capacidad integradora del Estado se pierde gradualmente. Y la ideología del mercado sustituye a la ideología de la nación.

Pero la crisis del Estado es también consecuencia de la descomposición de la clase política en muchos países como resultado de dos procesos interrelacionados que desembocan en una práctica política autodestructiva: la política del escándalo. El primer proceso es la penetración del Estado y del sistema político por redes criminales organizadas. No es un fenómeno significativo en todos los Estados, por ejemplo no lo es en Chile, a pesar de algunos episodios puntuales. Pero los medios de comunicación han revelado corrupción sistémica en Colombia, en Bolivia, en Paraguay, en Venezuela, en Perú, en Ecuador, en Argentina, en las grandes ciudades de Brasil, sobre todo en Río, en la mayor parte de América Central y el Caribe y, con particular intensidad, en México, en donde la crisis política sufrida por México en los noventa no es separable de las luchas que aún libran los carteles mexicanos del narco tráfico por obtener influencia en los distintos niveles del Estado. La corrupción resultante de esta penetración criminal deslegitima al Estado y bloquea su capacidad de maniobra en un momento decisivo de su reorientación.

El segundo proceso al que hago referencia es la emergencia, en América Latina como en el resto del mundo, de una nueva forma de competencia política, la política informacional. Se trata de que los medios de comunicación se han constituido en el espacio preferente de la política. No es que los medios controlen la política, sino que los líderes y partidos políticos compiten entre ellos y se relacionan con los ciudadanos en y por los medios. La política mediática tiene sus reglas, a saber la personalización de los liderazgos y la credibilidad de personas y siglas como valor fundamental en la formación de la opinión de los ciudadanos. Si lo esencial para ganar el apoyo popular es establecer dicha credibilidad, el arma de lucha política esencial es destruir la credibilidad del adversario. Y para ello el medio más eficaz es la difusión en los medios de comunicación de informaciones negativas sobre personas y organizaciones políticas. La mayor parte de esas informaciones provienen del entorno de los propios partidos, así como de grupos de interés que tienen por objetivo el desgastar a una persona o partido. Son filtraciones a los medios más que periodismo de investigación lo que alimenta la política del escándalo. Los niveles de corrupción son suficientemente altos como para proporcionar abundante material. Pero si no hay bastante, se fabrica, se manipula, se desinforma. Y como todos (o casi todos) lo hacen, y como hay que tener munición en reserva para disuadir al adversario, el debate político aparece dominado cada vez más por las denuncias, contra-denuncias y desmentidos sobre la corrupción y abusos de

poder de la clase política. Y como los medios de comunicación son cada vez más flexibles y omnipresentes en la vida de la gente, son esas imágenes, y no los debates sobre alternativas políticas, los que constituyen la relación entre el ciudadano y el Estado. Así, aun en países como Chile, sin penetración significativa de la economía criminal, el escándalo, ya sea de tipo sexual o ligado a algunos casos puntuales de corrupción, también ha pasado al primer plano de la escena política. El resultado es el desprestigio de la clase política y, en último término, en los casos extremos, un deterioro de la legitimidad del Estado.

Tras haber visto disiparse la relación entre Estado y nación, los ciudadanos asisten a la disociación entre representatividad y legitimidad. A la crisis del Estado se añade la crisis del sistema político. La deriva política conduce a la deriva de la identidad

LA CRISIS DE LA GLOBALIZACIÓN EN AMÉRICA LATINA Y LOS PROYECTOS ALTERNATIVOS DE ORGANIZACIÓN SOCIAL

La contradicción entre los requisitos de funcionamiento del nuevo sistema de producción y organización social estructurado globalmente y las condiciones concretas de América Latina al inicio del siglo XXI se traduce en una crisis multidimensional que tiene expresiones distintas según como se manifieste esa contradicción en cada país. La integración en la globalización sin informalismo conduce a una estructura socioeconómica

excluyente, por lógica de redes, para gran parte de la población y territorio, mediante la capacidad de las redes globales de comunicación y relación para apropiarse selectivamente de la creación de valor, integrando y marginando a la vez. El antídoto a la exclusión social selectiva es el salto directo al informalismo y la progresión de una globalización por etapas, mediante integración comercial regional y mediante la regulación de los flujos de capitales. Funcionar como California o Francia sin serlo, conduce a la economía ficción como la que caracterizó a la Argentina de Menem y tiene límites concretos en cuanto desaparecen las reservas monetarias en que se basaba la homologación financiera. La integración autónoma en la globalización exige una profunda reforma tecno-económica en el conjunto del continente. Pero para llevar a cabo esta reforma hace falta un apoyo social que, tras una década de adaptación a la globalización y repetidas crisis resultantes de ese proceso de rearticulación plantea la cuestión de la reconstrucción de la legitimidad política como el requisito previo de cualquier reforma técnica. Hablando en términos generales, y considerando a Chile como excepción en este aspecto, la perspectiva de dicha reconstrucción se complica cada vez más. Cuanto más limitada es la base de acumulación global en un país, más se concentran los escasos recursos disponibles en el sector globalizado, en la elite política y en sus círculos de apoyo, con lo cual se achica su base social. Y, muy probablemente, aumenta la corrupción de la

clase política en la medida en que en el sálvese quien pueda, las elites se salvan ellas mismas en primer lugar.

Ya disminuida la legitimidad política nacional, sustituida por la legitimidad del mercado, la incapacidad de redistribuir y hacer participar mediante el mercado, conduce a una crisis general de legitimidad. Esta situación limita la capacidad de reforma del Estado y su apertura democrática, por el temor de perder el control del proceso de apertura.

La identidad nacional no desaparece, pero se disocia del Estado, por lo cual es apropiada por distintas expresiones reivindicativas, no necesariamente compatibles. En ese sentido se convierte más que en identidad en ideología, fraccionada entre actores que no participan de un proyecto común de organización de la sociedad. Las identidades étnicas, religiosas y territoriales cobran fuerza, fraccionando aún más la identidad nacional y debilitando su capacidad de integración.

En el límite, hay crisis económica, crisis social y crisis de legitimidad política, llevando incluso a crisis del Estado mismo, como es el caso en Bolivia, en Venezuela, en Colombia, en Haití, y tal vez en Perú, en Ecuador, en Nicaragua, en Guatemala, en Paraguay. O como pudo ser en la misma Argentina antes de que se produjera el milagro político de Kirchner (que, como todos los milagros, puede desvanecerse con las sombras del ocaso). Según la dimensión dominante en cada proceso de crisis, el sistema se hace insostenible en una u otra dimensión, pero todos los factores están presentes en las crisis de todos los países. Así, pensando en la crisis

argentina del 2001, ésta surgió como expresión de la insostenibilidad de una economía globalizada sin bases reales para mantener una convertibilidad paritaria con el dólar, agravada por la corrupción de una clase política privilegiada, desembocando en una crisis de confianza en las instituciones financieras ("el corralito") y en la clase política ("¡que se vayan todos!"). Cuando la contradicción es entre un Estado débil y una economía criminal pujante, se llega a la quiebra del Estado y, al intentar recomponerse el Estado en términos militares con apoyo estadounidense, a la guerra civil, como en Colombia. Cuando se disocia por entero la base social del Estado entre las clases medias aspirantes a la globalización y los sectores populares en búsqueda de un Estado populista, se rompe la legitimidad política y la identidad nacional a partir de una oposición de clase, amenazando una guerra de clases y una ruptura del Estado en términos distintos de la imagen clásica del marxismo latinoamericano, pero semejante a los populismos revolucionarios: ese parece ser el caso, cada vez más dramático, de Venezuela. Cuando la identidad nacional es traicionada por la globalización dolarizada, como en Ecuador, surgen con fuerza identidades alter-nativas, de base indígena, como formas de expresión de las luchas de los excluidos. No es tan distinto de las contradicciones expresadas por el movimiento zapatista, aún no resuelto en México, o de movimientos comunitarios en otros países.

En suma, sin informacionalismo, sin regulación gradual de la globalización, sin Estado reformado, sin

legitimidad política, sin control de la economía criminal, sin principios de identidad compartida y sin foros de debate y participación política de los grandes sectores excluidos, la globalización truncada de América Latina no parece social y políticamente sostenible, aunque esto sea materia de investigación más que de afirmación. Si bien Chile, junto con Costa Rica, parece constituir la excepción a la regla. De ahí el interés de su estudio y las implicaciones de su experiencia para el conjunto de América Latina.

LOS ACTORES SOCIALES DE LA RECOMPOSICIÓN DE UN ORDEN POLÍTICO

La reconstitución de una relación estable y dinámica entre economía, política y sociedad, pasa por lo reconstitución de actores sociales específicos capaces, en cada contexto, de llevar a cabo esa articulación. Los gobiernos nacionales por sí solos no pueden ser los actores únicos de dicha reconstrucción. Pero siguen siendo indispensables para articular política, sociedad y economía. El contexto internacional no es favorable a las reformas. Los EE.UU. no están dispuestos a reformar, sino que dan prioridad absoluta al imperativo de su seguridad, a partir de la paranoia defensiva-ofensiva suscitada por el 11 de septiembre. La Unión Europea no tiene política clara ni común sobre el tema, aparte de buenas palabras. Por tanto América Latina tiene que construir su espacio autónomo en una globalización regionalizada. Para esa construcción, la relación entre

gobiernos y actores sociales es decisiva. ¿Cuáles son esos actores? Los tradicionales (sindicatos, campesinos, etc.) son frecuentemente representantes de intereses corporativos, poco capaces de definir en términos propios un proyecto de inserción en la globalización que sea válido para el conjunto de la sociedad. Los movimientos identitarios son formas de repliegue comunitario, esenciales para la supervivencia, pero agravan la crisis de sostenibilidad institucional del sistema en su conjunto.

El llamado movimiento antiglobalización (o por la justicia global, en los términos de sus actores) es una fuente de proyectos alternativos. Ha cambiado el debate sobre el sistema, ha abierto opciones posibles. Ya no es anti, sino por otra globalización. Pero en sí no es un actor, ni tiene contenidos compartidos. Es un conjunto de actores y de intereses y valores diversos, y es global y local a la vez, esa es su fuerza. Es en realidad un gran movimiento democrático, cuya bandera es el "no a la globalización sin representación", lanzado en Seattle. Propugna un mecanismo y un debate sobre los contenidos de la globalización, replantea el control social y político de la economía y la tecnología a partir de la sociedad y la política. Pero como no es un actor en sí, necesita la mediación política. Puede ser principio de relegitimación para aquellos Estados y gobiernos que lo asuman como tal, aun con la necesaria distancia. En cierto modo es el embrión de una sociedad civil global, junto con la densa trama de más de 30.000 ONGs operando internacionalmente (Juris, 2004).

En suma, la construcción de un proyecto alternativo de globalización agrupa a un sistema complejo de actores. Es un movimiento social red, intentando conectar a nodos del Estado-red que emerge en la sociedad red y en un contexto de redes globales de riqueza, información y poder. ¿En qué medida pueden los Estados responder positivamente a esta propuesta confusa pero innovadora para hacer socialmente sostenible el sistema? En la medida en que maximicen su autonomía como actores políticos, por un lado, con respecto a los intereses inmediatos que representan (incluido los propios de los gobernantes como individuos dispuestos a enriquecerse) y, por otro lado, con respecto a la red global de intereses y estrategias en la que están inmersos. Es decir, la autonomía política puede permitir crear un espacio nuevo de representación en donde los nuevos actores sociales puedan emerger y dar sustento social a la representación política colectiva en el contexto de relaciones globales. Los actores se articulan entre ellos globalmente y con respecto a los gobiernos o sistemas políticos local y nacionalmente. Sólo en la medida en que esa doble relación, global y local, consiga un espacio de decisión específica a cada sociedad, puede producirse una regulación de la globalización que tenga en cuenta los intereses y valores sociales no incluidos en los programas de dominación económica e ideológica inscritos en las redes globales dominantes. Sólo entonces la globalización será sostenible. Porque será la globalización de las personas y no sólo del capital. Porque comunicará identidades en lugar de disolverlas

bajo la dominación de una cultura global o convertirlas en principios autistas de resistencia. Ese es el debate planteado en América Latina en los prolegómenos del siglo XXI. Y en ese debate se sitúa Chile como un caso especial cuyo análisis tiene relevancia especial para el conjunto de América Latina e incluso para un mundo en busca de nuevas vías de desarrollo. Porque, aun con las limitaciones y contradicciones que se pueden observar en la economía y la sociedad chilenas, Chile, en contraste con el conjunto de América Latina, presenta un balance de progreso económico, social y político continuado en el periodo 1990-2004. ¿A qué se debe el éxito relativo del desarrollo chileno? ¿Son extrapolables los factores subyacentes a ese proceso de desarrollo? ¿Existe un modelo chileno de desarrollo? En realidad, como trataré de mostrar, hay dos modelos chilenos de desarrollo. Y mientras uno de ellos ha fracasado, con harta costo humano, en el conjunto de América Latina, el otro, el más reciente, ofrece importantes lecciones que podrían ser de utilidad para la región y para el mundo. Veamos de qué se trata.

III. EL MODELO DEMOCRÁTICO CHILENO DE DESARROLLO

En contraste con el resto de América Latina, Chile se ha caracterizado por un fuerte crecimiento económico sostenido desde 1984, con una aceleración del crecimiento en los noventa y una leve recesión en 1999, seguida por un crecimiento moderado en 2000-2003 y un repunte del crecimiento en 2004. En la última década, la competitividad de la economía chilena se ha acrecentado, ganando partes de mercado mundial, a diferencia de América Latina en su conjunto. Pero, además, han mejorado las condiciones de vida de la población (reflejado en las estadísticas vitales), se ha reducido a la mitad el nivel de pobreza, y ha habido un progreso notable en el nivel educativo, según evidencian los datos del Censo del 2002 en comparación con los del Censo del 1992 (Tironi y otros, 2003). La experiencia chilena en los años noventa demuestra la posibilidad de crecimiento económico con integración en sus beneficios de la gran mayoría de la población, aun de forma desigual, en el marco de la nueva economía global. Pero hay que recordar que no hay uno sino dos modelos de desarrollo chileno bien distintos: el que denominaré *autoritario liberal excluyente*

y el que, a falta de un mejor término, llamaré *democrático liberal incluyente*. El calificativo de liberal se funda en el énfasis que ambos modelos ponen en el mercado y en la apertura económica internacional como elementos esenciales del crecimiento económico. Pero, naturalmente, las otras dos dicotomías que caracterizan los modelos (autoritario/democrático y excluyente/incluyente), los hacen profundamente distintos, no sólo política o éticamente, sino también económicamente y operativamente. Por *modelo autoritario liberal excluyente* entiendo aquel modelo de desarrollo que excluye de los beneficios del crecimiento a gran parte de la población mediante el ejercicio autoritario e incontrolado del poder del Estado, al tiempo que prioriza los mecanismos de mercado sobre los valores de la solidaridad social, sin aplicar políticas públicas correctoras de las desigualdades y de los privilegios de las elites sociales y económicas. Por *modelo democrático liberal incluyente*, entiendo el modelo de desarrollo gestionado a partir de un Estado democrático resultante de la libre elección de los ciudadanos y que, aun manteniendo los mecanismos de mercado como forma esencial de asignación de recursos, implementa políticas públicas encaminadas a la inclusión del conjunto de la población en los beneficios del crecimiento, en particular mediante una política fiscal redistributiva y un esfuerzo creciente de políticas públicas en la mejora de las condiciones de vida de la población a través de la educación, la salud, la vivienda, la infraestructura de servicios, los equipamientos sociales y culturales y las ayudas y subsidios a las

personas necesitadas. El modelo es también incluyente porque establece mecanismos de negociación y consulta con los actores sociales, buscando la elaboración de políticas económicas y sociales mediante un consenso con los representantes de los distintos grupos de intereses existentes en la sociedad.

LOS DOS MODELOS CHILENOS DE DESARROLLO

La Tabla 1 presenta algunos indicadores seleccionados que permiten comparar el proceso de desarrollo, por periodos: 1950-73, 74-83, 84-89, 90-98, 99-2003.

La Tabla 2 organiza los datos macroeconómicos para el periodo democrático. Para el propósito de nuestro análisis, la macro-periodización de la Tabla 1 sigue criterios a la vez de ciclo económico y de ciclo político, y establece la comparación entre 1974-83 y 1984-89 (periodo de la dictadura de Pinochet) y 1990-2003 (periodo de transición y consolidación democrática).

Se observan resultados muy superiores, tanto en lo económico como en lo social del modelo democrático. En especial, la inflación cae del 27,3% en 1990 al 4,7% en 1998 y al 2% en 2003; el desempleo desciende del 15% en 1984-89 al 7% y luego al 9% en 99-03. El salario real sobre un índice 100 en 1970, pasa del 93 en 1973 y 103 en 1984-89 al 180 en 1999-2003. El ritmo más alto de crecimiento (7,8%) se da en 90-98, para caer al 2,3% en 99-03, aun situándose por encima de América Latina y del promedio mundial, para repuntar al 5,9% en el 2004.

Chile: Indicadores Económicos Seleccionados 1950-2003
(Porcentajes)

TABLA 1

Años	Cremento. PIB (anual)	Cremento. Export. (anual)	I/PIB (%)*	Sup. F/PIB (%)**	Tasa de Inflación	Tasa de Desempleo	Índice de Salario Real (fin período) 1970=100	% de Pobres
1950-73	3.6	2	19	-	(50-70) 30	6	100.0	
1974-83	1.7	11	17	1973: -25	1973: 600	1973: 3	93	
1984-89	6.4	10	19	1983: -3 1984: -4	1983: 23.1 1984: 23	1983: 24 1984: 15	103	40.0
1990-98	7.8	10	28	1989: 1	1990: 27.3 1989: 21.4	7	142	21.7
1999-03	2.3	7	27	-1	1999: 2.3 1998: 4.7	9	180	20.6
2004	(est.)				2003: 2			

* I/PIB (%): Porcentaje de Inversión sobre el PIB.
 ** Sup. F/PIB (%): Porcentaje de Superavit Fiscal sobre el PIB.
 Fuente: Elaboración sobre datos del Banco Central de Chile, INE y Dirección de Presupuesto del Gobierno de Chile, varios años.

TABLA 2
Desempeño macroeconómico de Chile

VARIABLE	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
PIB (% Var. real anual)	3,7	8	12,3	7	5,7	10,6	7,4	6,6	3,2	-0,8	4,5	3,4	2,2	3,3
Demanda Interna (% Var. real anual)	2,9	6,2	14,8	10,8	5,5	15,9	7,8	7,2	3,7	-5,8	6	2,3	2,5	3,5
Ingreso Nacional (% Var. real anual)	3,2	7,7	12,9	6,4	7,9	16,9	3,5	6,6	3,7	-0,5	4,4	2,3	2,5	3,9
Formación bruta de Capital fijo (%PIB)	20,7	19	21	23,3	23,4	26	26,4	27,4	27	22,2	23,2	23,2	23	23,4
Ahorro Nacional (% PIB)	24,2	24,1	24,8	23,9	25,4	27,6	23,1	23,1	21,8	21	20,6	20,5	20,6	21
Inflación (dic. de cada año)	27,3	18,7	12,7	12,2	8,9	8,2	6,6	6	4,7	2,3	4,5	2,6	2,8	1,1
Empleo (% Var. anual)	2,5	1,4	4,4	5,8	1,1	1,2	1,4	1,9	1,8	-2,2	1,1	0,3	1,1	-
Desempleo %	7,7	8,2	6,7	6,5	7,8	7,4	6,5	6,1	6,1	9,7	9,2	9,2	9	8,5
Promedio anual Salarios reales (% Var. anual)	1,8	4,9	4,5	3,5	4,5	4	4,1	1,3	2,9	2,4	0,7	2,6	1,2	2,3
Tasa de Interés de referencia (1,2,3) (%)	7,9	5,8	5,5	6,5	6,4	6,1	7,3	6,9	9	5,9	5,3	6,5	3	2,25

Por tanto hay, en lo esencial, ruptura de tendencia entre los dos periodos, el de la dictadura (1974-1989) y el de la democracia (1990 en adelante) aunque el modelo democrático se construya sobre las bases de algunas de las políticas liberales anteriores. Además, el modelo autoritario se caracterizó por su inestabilidad. Se produjo un hundimiento de la economía dos veces: en 1974-76 (explicable por la inestabilidad creada por el golpe militar) y en 1982-84, en este caso relacionado con la maxi-devaluación de 1982. En el primer caso la economía cayó en un 13% del PIB, en el segundo en un 16%, con efectos particularmente regresivos: el desempleo llegó al 30%, el 50% de las familias cayeron en la pobreza. La crisis bancaria subsiguiente tuvo un costo para el país equivalente al 35% del PIB (Foxley, 2003a). En contraste, la primera recesión del modelo democrático, en 1999, ligada a la contracción internacional derivada de las crisis asiática, rusa y brasileña, la economía chilena sólo cayó en un 0,8%, repuntando de inmediato en el 2000 a un 4,2%, bajando de nuevo al 3,1% 2001 y al 2,1% en 2002, de nuevo por la vulnerabilidad de una economía abierta al contexto internacional que, en este caso, sufrió el impacto de la crisis de la nueva economía en Estados Unidos.

El contraste entre los dos modelos de desarrollo es particularmente evidente en términos de su dimensión social y de distribución de la riqueza. Así los datos del censo 2002 muestran: mejora sustancial de las condiciones de vivienda e infraestructura (véase Tabla 3), así como del equipamiento del hogar en electrodomésticos,

Nota: Se utiliza la matriz insumo producto 1986 hasta 1996 luego se utiliza la matriz insumo producto de 1996. Año 2003 última cifra informada.

(1) Hasta mayo de 1995 se utilizó la tasa de PRBC a 90 días.
 (2) Desde mayo de 1995 a julio de 2001 se utilizó la tasa de interés real a un día (TPM+UR). El promedio de 1995 corresponde al de la TPM desde mayo a dic. 1995. (3) Desde agosto de 2001 se utiliza la tasa de interés nominal a un día (TPM), el promedio de 2001 considera la TPM nominal desde agosto a dic. de 2001.

Fuente: Banco Central-INE-DIPRES-COCHILCO.

VARIABLE	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
Balance Fiscal Efectivo (% PIB)	0,8	1,5	2,3	2	1,7	2,6	2,3	2	0,4	-0,7	-0,5	-1,3	0,1	
Tipo de cambio real (índice 1986=100)	112,7	106,4	97,6	96,9	94,3	88,9	84,8	78,2	78	82,3	86	96	96,9	104,4
Cuenta Corriente (% del PIB)	-1,6	-0,3	-2,3	-5,7	-3,1	-2,1	-4,1	-4,4	-5,1	-0,4	-1,2	-1,9	-0,9	
Exportaciones (MMUS\$)	8.373	8.942	10.007	9.199	11.604	16.024	16.657	17.902	16.353	17.194	19.246	18.466	18.340	20.875
Importaciones (MMUS\$)	7.742	8.207	10.183	11.134	11.820	15.900	17.823	19.298	18.779	14.735	17.091	16.412	15.827	17.936
Reservas internacionales (MMUS\$)	5.348	6.640	9.008	9.758	13.467	14.805	15.805	18.274	16.292	14.946	15.110	14.400	15.178	15.851
Deuda Externa (MMUS\$)	17.425	16.364	18.242	19.186	21.478	21.736	22.979	26.701	31.691	34.112	36.477	38.032	40.395	41.179
Precio del cobre (Cvros. de US\$/Libra, BML)	120,9	106,1	103,6	86,7	104,9	133,2	103,9	103,2	75	71,4	82,3	71,6	70,6	80,7

TABLA 3

Porcentaje de personas sin déficit de infraestructura

	1992	2002
<i>Área urbana</i>		
• Electricidad	97.8	99.1
• Agua potable	97.8	98.9
• Servicio higiénico	81.1	97.1
• Ducha	80.8	95.5
• Combustible	88.4	93.1
Casos sin déficit	72.2	88.3
<i>Área rural</i>		
• Electricidad	54.5	87.9
• Agua potable	26.5	44.1
• Servicio higiénico	13.1	52.5
• Ducha	18.5	51.1
• Combustible	29.7	48.7
Casos sin déficit	4.7	18.4

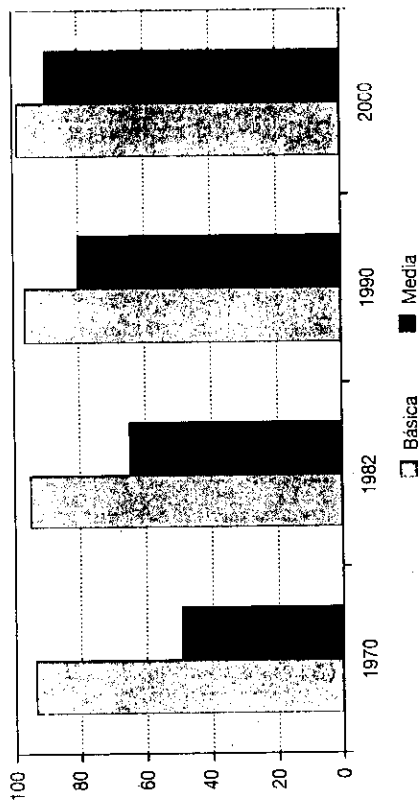
Fuente: INE, Elaboración sobre Censos 1992 y 2002.

televisión, radio, teléfonos móviles y fijos (más de la mitad de los hogares), vehículos motorizados (35% de hogares sin contar camionetas), computadoras (24, 2% de los hogares); acceso a Internet (15% de los hogares, en comparación con menos del 5% en el conjunto de América Latina).

Se observa también una mejora sustancial del nivel educativo (véase Gráfico 1).

GRÁFICO 1

Evolución de la cobertura educacional en Chile



Fuente: 2000: 1970 a 1992 CENSO, citado en Torche 2002. CASEN, citado en MIDEPLAN 2001.

Así, la escolaridad promedio de la población pasó de 7,6 años a 8,5 años. La educación básica aumenta en un 20% y era prácticamente universal a finales de los noventa. La enseñanza media entre 14 y 17 años llega a una cobertura del 90%. La cobertura en educación superior se duplica y en el grupo de 20-29 años, el 23,7% en 2002 habían accedido a algún tipo de estudios superiores. La educación parvularia aumenta un 26% con respecto a 1990, y las personas de 45 a 59 años aumentan su escolaridad en casi dos años. Las estadísticas vitales muestran una fuerte caída de la mortalidad infantil al 10,1 por mil y un incremento de la esperanza de vida a niveles de los países más avanzados,

casi 80 años para las mujeres y más de 70 para los hombres. Los grupos sociales más atrasados son los que más han progresado.

El porcentaje de población bajo el nivel de pobreza descendió del 38,6% en 1990 al 18,8% en 2003 y el de indigencia descendió del 12,9% en 1990 al 4,7% en 2003 (véase Gráficos 2 y 3).

GRÁFICO 2
Evolución de la Pobreza Total 1990-2003
(Porcentaje de la población)

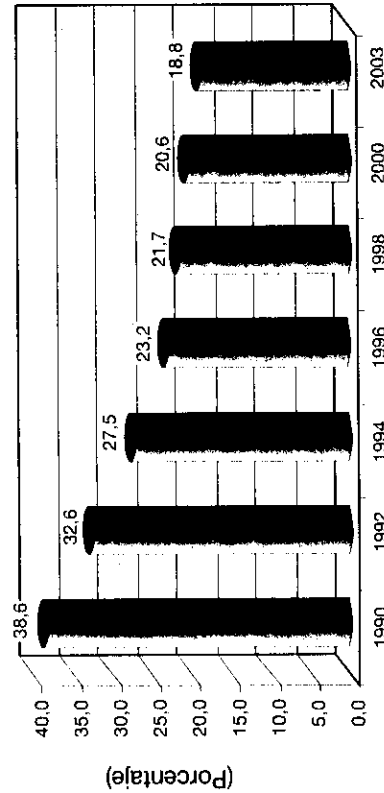
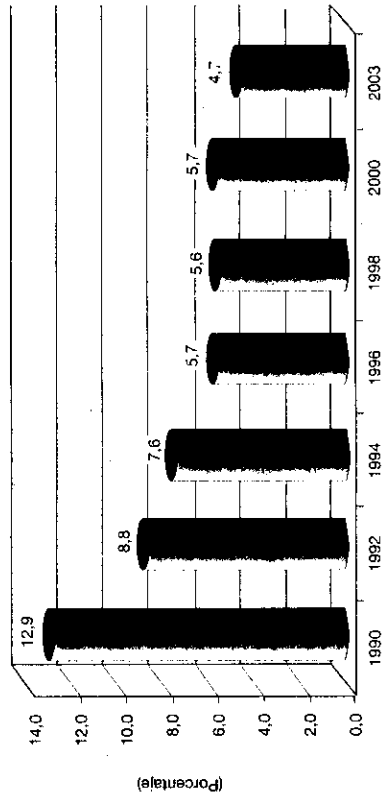


GRÁFICO 3
Evolución de la Indigencia 1990-2003
(Porcentaje de la población)



Con más del 72% de los hogares propietarios de sus viviendas, la movilidad residencial ha decrecido y las migraciones rurales-urbanas se han detenido (el 85% de la población está ya urbanizada), aunque la concentración metropolitana se mantiene: Santiago reduce población, pero en beneficio del Gran Santiago.

La estructura productiva se ha transformado. Las tablas 4 y 5 muestran la caída del empleo agrícola del 16,1% al 10,7% del total, al tiempo que se reduce considerablemente la ocupación en la minería y en la industria, en beneficio del crecimiento del empleo de servicios.

TABLA 4

Evolución de la composición del empleo por rama de actividad económica, 1992-2002 (Porcentajes)

	Total		Hombres		Mujeres	
	1992	2002	1992	2002	1992	2002
Agricultura	16.1	10.7	21.5	14.6	3.4	3.6
Minería	2.1	1.2	2.8	1.8	0.4	0.2
Industria	17.6	12.3	19.0	14.5	14.2	8.3
Elect., Gas y Agua	0.6	0.7	0.8	0.9	0.2	0.2
Construcción	7.1	7.7	9.9	11.5	0.7	0.8
Comercio	18.9	22.5	17.9	22.6	21.2	22.4
Transporte	6.7	7.4	8.6	9.7	2.4	3.2
Serv. Financieros	5.8	11.2	5.6	11.1	6.1	11.3
Serv. Com. y Sociales	25.0	26.3	13.7	13.3	51.4	50.0
Total	100	100	100	100	100	100

Aunque el peso del empleo en el comercio, típico de la economía tradicional ha crecido y se sitúa en un nivel alto (22,5%), los servicios financieros, característicos de actividades informacionales, son los que más han crecido en porcentaje, pasando de un 5,8% a un 11,2%. Sin embargo, los servicios comunitarios y sociales, de baja productividad, continúan siendo el sector más empleador (26,3%). Por tanto se trata de una economía de servicios, pero todavía con un sesgo hacia las actividades de menor productividad. La estructura del empleo por oficio parece indicar sin embargo una clara ascensión de los empleos de mayor cualificación. Así, el mayor incremento se produce entre los técnicos

TABLA 5

Evolución de la composición del empleo por oficio, 1992-2002, (Porcentajes)

	Total		Hombres		Mujeres	
	1992	2002	1992	2002	1992	2002
Directores/Gerentes	6.0	6.3	6.4	6.6	5.1	5.8
Profesionales	7.1	10.2	5.1	8.0	11.7	14.3
Téc. Medios	5.1	14.2	4.2	12.0	7.3	18.1
Empleados	12.7	8.8	9.6	6.8	19.9	12.6
Vendedores	11.0	12.8	8.3	9.9	17.2	18.1
Trab. Agrícolas	12.5	5.3	17.0	7.7	1.9	0.9
Obreros/Artesanos	17.2	12.1	21.8	16.8	6.6	3.5
Conductores/operarios	8.8	8.8	11.3	12.5	2.9	2.1
Trab. no calificados	19.7	21.5	16.3	19.8	27.4	24.5
Total	100	100	100	100	100	100

medios (que casi triplican su peso relativo entre 1992 y 2002), seguidos de los profesionales, que llegan a un 10,2%, mientras que decrece la proporción en el empleo de los trabajadores agrícolas, los empleados y los obreros. Ahora bien, se incrementan los trabajadores no calificados (que se sitúan en un 21,5%), lo cual parece indicar que Chile sigue la tendencia de los países más avanzados (por ejemplo de Estados Unidos) hacia la polarización ocupacional, con un incremento simultáneo de los empleos más cualificados y menos cualificados en la fuerza de trabajo (Aoyama y Castells, 2002).

La participación de la mujer en el mercado de trabajo aumentó del 28,1% al 35,7%. La tasa de escolaridad

femenina es la misma que el promedio nacional. La familia reduce su tamaño y muestra patrones cercanos a los de los países más desarrollados (Gubbins, Browne y Bagnara, 2003). Se da una segunda modernización, según la terminología de Tironi (2003), caracterizada por la desinstitucionalización creciente de las familias y el aumento de los hogares unipersonales.

Así pues, Chile consolidó su desarrollo entre 1990 y 2003: su PIB per cápita aumentó en casi un 90% entre 1989 y 2003. Se ha construido como sociedad moderna, mejorando sustancialmente sus condiciones de vida, con un proceso significativo de redistribución en acceso a bienes y servicios. Sin embargo, hay que recordar que en INB per cápita en 2004 Chile aún se sitúa muy lejos de los países europeos o incluso asiáticos de nueva industrialización, aunque por encima del promedio de América Latina, cerca del nivel de México y por delante de Argentina y Brasil. En concreto, según datos del Fondo Monetario Internacional el nivel de renta per cápita de Chile ponderado en términos de PPC (purchasing power parity), en 2004 era de 9.950 US\$, casi un 20% por encima de la media de América Latina (8.087), por delante de Argentina (9.251) y Brasil (8.059) y casi al nivel de México (10.021). Pero Chile está aún a menos de la tercera parte del nivel de renta promedio de los países avanzados (30.807), a menos de la mitad de España (21.658) y aún más distante de los países más dinámicos de Europa, Irlanda (35.185) y Finlandia (29.357). Mas serio aún: el índice Gini de desigualdad de la renta está entre los más altos del mundo (55,9 en

el año 2000), aunque es inferior al de varios países de América Latina, la región con mayor desigualdad de ingreso en el mundo: Brasil es el campeón, con un 63,9 en el 2001, seguido por Bolivia con 61,4 y Argentina con 59 en el 2002 (CEPAL, 2004). Recordemos que el índice Gini de Finlandia se sitúa en 25,6. Cabe señalar sin embargo que, en contra de algunas aseveraciones, los cálculos de Ffrench-Davis a partir de las Encuestas de Presupuestos Familiares realizadas por el INE, muestran que en el Gran Santiago, entre 1990 y 1997 la desigualdad en la distribución del ingreso se redujo entre un 28,6% y un 32,3%, tomando como referencia la comparación entre el quintil más rico y el quintil más pobre en ese periodo. Entre 1997 y 2003 (periodo para el cual no hay encuestas comparables), teniendo en cuenta el aumento del sueldo mínimo legal y de las pensiones, así como el incremento de la proporción de propietarios de sus viviendas, es improbable que la desigualdad se haya incrementado, aun a pesar del aumento de la desocupación. La razón proviene de la concentración de los esfuerzos redistributivos, tanto en subsidios monetarios focalizados como en políticas sociales, en los sectores de menores ingresos de la población. Las políticas de vivienda, salud y educación cuando son redistributivas son un mecanismo importante de compensación de la desigualdad social. Según Foxley el 40% de la disminución de la pobreza en los noventa puede atribuirse a los efectos de las políticas sociales. Y en el periodo más reciente, según los datos de la Encuesta CASEN de 2003, calculando el aporte que representan

los beneficios de los programas de salud, educación y subsidios monetarios, el 20% de los hogares más pobres aumentó su participación desde un 3,9% del ingreso a un 6,9% del ingreso total, mientras que el 20% de hogares más ricos redujo su participación desde un 56,5% del ingreso al 52,3% del ingreso total (Mideplan, 2004). De modo que si bien la economía tiende a acen- tuar la desigualdad, la política tiende a corregirla.

Aun así, hay elementos considerables de desigual- dad en la educación universitaria, en las diferencias regionales y en la cobertura de pensiones. En la educa- ción universitaria, las familias cubren un 70% del gasto y las universidades privadas no siempre corresponden en calidad a su elevado costo (véase OCDE, 2003a). Por otra parte, un análisis de mejora de patrimonio por comunas, sobre datos del censo entre 1992 y 2002, muestra que 12 de las 15 que más han mejorado están en la Región Metropolitana, mientras que las que me- nos han mejorado están en La Araucanía y la Región de Los Lagos. El porcentaje de pobres de la VIII Región es el doble de la Región Metropolitana. Por tanto, parece persistir una notable desigualdad regional. Con respecto a las pensiones, la privatización del sistema de cober- tura crea una situación de incertidumbre en el marco de la volatilidad del mercado financiero. Y además, no cubren a la totalidad de la fuerza de trabajo. Aun así, en este tema esencial ha habido progreso: el porcentaje de cubiertos sobre la fuerza de trabajo en 1989 era del 56,81% y pasó al 72,6% en 2002, al tiempo que el por- centaje de los acogidos al sistema antiguo disminuía

del 8,1% al 2,9%, de modo que en 2002 el 75,44% estaba cubierto. Es en ese contexto que se planteó en 2002-2004, el debate sobre la reforma de las pensiones.

En suma, el modelo democrático liberal incluyente chileno, manteniendo el dinamismo del crecimiento y la orientación exportadora de la economía, ha mejora- do las condiciones de vida de la población y reducido a la mitad la proporción de pobres y en tres veces la proporción de indigentes. Pero no ha podido solventar la herencia de desigualdad, que se mantiene a altos niveles. Y, por otro lado, está todavía muy lejos de los niveles de riqueza de los países europeos o de los tigres asiáticos. Chile no ha terminado su esfuerzo desarro- llista ni su esfuerzo redistribuidor. La pregunta es si las condiciones actuales del desarrollo global, en el marco de una economía informacional interdependiente y de una globalización asimétrica, permiten mantener la trayectoria a partir del mismo modelo, o sea, si el modelo es sostenible. Pero para ello hace falta saber de qué modelo hablamos.

CARACTERÍSTICAS DEL MODELO CHILENO DE DESARROLLO DEMOCRÁTICO LIBERAL INCLUYENTE DE LOS AÑOS NOVENTA

Se trata de un modelo de crecimiento basado en una economía abierta con amplia liberalización de intercam- bios y de mercados internos, pero con intervención es- tratégica del sector público, tanto reguladora de la po- lítica macroeconómica, crediticia y de comercio exterior,

como en asignaciones de recursos orientadas al gasto social en función de prioridades políticas. El sector exterior representa en torno al 50% del PIB. Pero, sobre todo, se ha producido una transformación profunda del modelo exportador en la última década: en 1990 las exportaciones mineras eran el 55,5 % del total, en el 2000 el 46,4%. Asimismo las agropecuarias, silvícolas y de pesca disminuyeron del 11,9% al 9,4%. En cambio, las industriales se incrementaron del 28,3% al 44,2%, con un crecimiento especialmente intenso en las no tradicionales, del 12,3% al 32,7%. Las exportaciones agroindustriales, acuícolas e industrial-pesqueras que eran de 2123 millones de dólares en 1990, alcanzaron los 4783 millones en 2000. Se puede apreciar, por tanto, una modernización del aparato productivo y la apertura de nuevas líneas de competitividad industrial, particularmente en el sector agro-industrial e industrial-acuícola.

El análisis econométrico de las fuentes de crecimiento, realizado por Francisco Gallego y Klaus Schmidt-Hebbel (2002), del Banco Central de Chile, muestra que comparando el periodo 1961-85 con el de 1986-2000, la contribución decisiva al crecimiento en el segundo periodo proviene de la productividad total de los factores (PTF), muy por encima de la contribución representada por el trabajo y el capital. En este sentido, el Chile de los noventa, parece acercarse al modelo intensivo de crecimiento (combinación más eficiente de los factores de producción) característico de las economías informacionales, en contraste con el modelo extensivo, característico de las economías industriales clásicas,

basado en la aportación cuantitativa de capital, trabajo y recursos naturales. Además, todos los sectores aumentan de modo similar. Por tanto, es un desarrollo derivado de la productividad y competitividad crecientes de la economía en su conjunto, no del efecto de un sector dinámico que tira de los demás.

En un estudio distinto, descomponiendo los elementos contribuyentes a la tasa de crecimiento de la PTF usando series de tiempo para Chile, Schmidt-Hebbel (2001) encuentra que para el periodo 1990-97, el crecimiento de la PTF se produce, a pesar de peores términos de intercambio, en base a tres componentes que, en orden decreciente de su contribución, son: ¹ mejores políticas estructurales; ² estabilidad macroeconómica; ³ residuo estadístico en la ecuación de la función de producción. El residuo puede ser interpretado, como siempre, de forma diversa pero probablemente refleja la mejor gestión y organización de empresas, la incorporación de nueva tecnología y la generación/difusión de conocimiento.

Los otros dos elementos citados por Schmidt-Hebbel (mejores políticas estructurales y estabilidad macroeconómica) no son identificados de forma específica en el estudio, pero pueden ser puestos en relación con las políticas económicas y el contexto institucional creado en Chile a partir de 1990 (Foxley, 2003a). En efecto, los análisis de los servicios de estudio del Banco Central muestran que el crecimiento chileno en los noventa anticipa el ahorro doméstico y anticipa el ahorro externo. Muestran asimismo que la acumulación

de capital, tanto nacional como extranjero, sigue al crecimiento más que lo causa. Se trata pues de una productividad y competitividad generadas en el sector privado que se expanden, tanto en el mercado externo como en el interno, a partir de la estabilidad macroeconómica y de las políticas estructurales (Martínez y Díaz, 1996). Veamos pues cuál es el contenido de estas políticas y la contribución específica de este contexto institucional al crecimiento económico.

LAS REFORMAS DE LOS NOVENTA Y SUS EFECTOS

En primer lugar, parece haber sido económicamente fundamental la estabilidad institucional obtenida mediante un sistema democrático legitimado por la voluntad popular, en cuyo marco los actores sociales puedan concertarse sin restricciones y cuyas instituciones puedan ofrecer garantías de transparencia, de legalidad y de continuidad a los inversores, tanto nacionales como extranjeros, en el largo plazo (Foxley, 2003a, 2003b). A partir del momento en que el dictador perdió el control del país y que la población pudo expresarse, sólo una consolidación democrática permitía generar la estabilidad y la previsibilidad para el desarrollo económico (Ottone y Pizarro, 2003). En este sentido, en las condiciones concretas de Chile en este periodo histórico, y en el actual contexto internacional, desarrollo y democracia son complementarios, se necesitan mutuamente, en lugar de contraponerse (Foxley, 2003c). Por ejemplo,

nunca se hubiese podido firmar el ventajoso Acuerdo Comercial con la Unión Europea bajo el régimen de Pinochet. Es más, al tiempo que se creaban las condiciones para el consenso, se incrementó la capacidad política y administrativa del Estado, de modo que la mejora de la gobernabilidad de Chile, basada en la legitimidad social y política, es un componente central de la política económica y, por tanto, del crecimiento económico.

Segundo, la continuación de la orientación de economía abierta, creando las condiciones para su consolidación, mediante reducción arancelaria unilateral y acuerdos comerciales con la Unión Europea, con los países vecinos y con el Tratado de Libre Comercio impulsado por Estados Unidos.

Tercero, la determinada política antiinflacionista mediante tasas elevadas de interés medio real y política presupuestaria de superávits en el sector público, con el efecto añadido de proveer una reserva para políticas expansivas anticíclicas.

Cuarto, el incremento sustancial del gasto en educación, vivienda y salud, financiado de forma no inflacionista, contando con un alto crecimiento y, sobre todo, con un aumento impositivo de 2% del PIB aplicado en 1990. Este aumento de impuestos, aprovechando el capital político inicial de la Concertación democrática, y realizado de forma dialogada pese a la hostilidad inicial de los actores sociales y la oposición política, fue esencial para proporcionar la base fiscal del proceso de desarrollo (Foxley, 2003a).

Quinto, la creación de un sistema de relaciones industriales estable, mediante la reforma del código laboral para asegurar estabilidad relativa del empleo, aumento del salario mínimo y mecanismos de negociación colectiva con sindicatos representativos. Merced a estas reformas, los actores sociales se han comportado responsablemente y los aumentos salariales han podido pactarse en base a la inflación venidera esperada y a incremento de productividad, frenando así las tensiones salariales inflacionistas. En ese contexto, se ha podido dar un aumento del 5,3% del salario real en el periodo manteniendo la credibilidad de la política antiinflacionista.

En esas condiciones de estabilidad institucional y monetaria pudo producirse un aumento significativo de la inversión, que pasó del 19% del PIB en 1984-89 al 28% del PIB en 1990-98 y al 27% en 1999-2001. La inversión extranjera aumentó también, a un nivel del 5% del PIB en los noventa y, a diferencia de lo que ocurrió en la década de los ochenta, no fue para comprar empresas privatizadas sino para participar en proyectos nuevos en diversos sectores, tanto de tecnología, como de minería, recursos naturales, y servicios, en particular financieros.

Sexto, la política pública tuvo también una intervención reguladora cuando hizo falta, en particular, mediante el impuesto a la entrada de capitales a corto plazo, para frenar la especulación financiera y el contagio de crisis de los mercados financieros globales. Esta política ha sido comentada favorablemente en la mayoría de medios expertos

en el mundo y es tomada hoy como modelo por muchos países.

Sin embargo, la propia apertura de la economía chilena la hizo vulnerable a las turbulencias financieras y a la volatilidad de los patrones de crecimiento en la economía global. De ahí surgió la crisis de 1999 que obligó a replantearse económica y socialmente la ideología del crecimiento ininterrumpido.

LA CRISIS DE 1999 Y EL MALESTAR CHILENO

La crisis de 1999 pareció cuestionar el modelo de crecimiento. En realidad fue limitada: caída del 0,8 % del PIB, para luego crecer al 4,2% en el 2000. El Estado actuó rápidamente, incrementando el gasto público y acelerando las negociaciones comerciales para la expansión del mercado externo, amortiguando la crisis. Pero fue un choque psicológico para una sociedad que se había acostumbrado al crecimiento y también un síntoma de problemas más profundos. Tironi ha propuesto el concepto de crisis sociológica para caracterizar esta crisis (Tironi, 2003). Los Informes sobre el Desarrollo Humano en Chile de 1999, 2000 y 2002, han documentado y analizado la inseguridad subjetiva que se suscitó en Chile al ver peligrar el asidero del crecimiento económico en una sociedad que parecía haber perdido buena parte de sus estructuras de apoyo y solidaridad tradicionales y cuyas instituciones eran frágiles tras el trauma de la dictadura. Según las conclusiones del estudio

realizado en 2002, el sentimiento de pertenencia a Chile se había debilitado, la vida personal se caracterizaba por la creciente individualización, la vida social sufría de la pérdida de vínculos de comunicación y la política perdía significación. En suma, Chile parecía tener un déficit cultural expresado en la dificultad de la sociedad para actuar como sujeto (IDH, 2002: 18). Una serie de análisis abundaron en una orientación similar, incluyendo los realizados por algunos de los mejores cientistas sociales del panorama chileno (Moulian, 1997; Garretón, 2003; etc.).

En cierto modo, el fin de la certidumbre del desarrollo y la apertura creciente de la sociedad y de la política, permitieron poner a debate los caminos y fines del propio desarrollo. Pero una sociedad reducida a la unidimensionalidad del crecimiento como forma de significado va perdiendo sus capacidades de imaginar los contenidos reales de los debates, las utopías movilizadoras de la práctica cotidiana. Como escribía nuestro añorado Norbert Lechner: "En la medida en que la gente no conversa sus experiencias, no comparte sus miedos y anhelos tampoco puede elaborar memorias colectivas. Por sobre todo, no logra procesar los desplazamientos y resignificaciones que operan continuamente las memorias individuales. (...) Los jóvenes suelen pensar que el futuro esperado no trajo cambios para ellos, que la democracia no cumplió sus promesas. En consecuencia, una alta proporción de ellos ni siquiera se inscribe en los registros electorales. Sus aspiraciones se concentran en el ámbito personal y por lo demás acarician fantasías de fuga. Prevalece un desencanto más

resignado que rebelde. Es dable suponer que este desencanto nace no sólo de la experiencia vivida por los jóvenes, sino también de la memoria transmitida por los padres" (2002: 82).

Así pues, en el contexto chileno, la problemática del desarrollo económico tiene un significado social y político que va más allá de la mejora de las condiciones de vida. Ha sido el proyecto colectivo al que se han agarrado los chilenos durante muchos años. Ello plantea, por un lado, cuando la economía se hace incierta, la necesidad de construir otras fuentes de sentido, a partir de proyectos individuales y colectivos que vayan más allá del crecimiento económico y del consumo individual. Pero también plantea la necesidad de profundizar y mantener el propio proceso de desarrollo durante un periodo histórico suficientemente largo como para reconstruir los mecanismos básicos de convivencia y de proyecto. Es decir, por un lado, Chile necesita deseconomizar su problemática de vida colectiva. Pero, por otro lado, sólo puede hacerlo desde una situación de prosperidad relativa y de distribución de esa prosperidad en el conjunto de la población.

En esa perspectiva se plantea la cuestión fundamental de la sostenibilidad del modelo de desarrollo tal y como se constituyó en los años noventa, en ruptura y continuidad a la vez con el modelo autoritario de desarrollo. Porque en la crisis de 1999 y en la ralentización del crecimiento en 2001-2003 hay factores coyunturales (crisis asiática, recesión europea por políticas de ajuste, estancamiento de Japón, lento crecimiento y crisis

institucionales en América Latina, y, sobre todo, la re-
cesión en Estados Unidos de la llamada "nueva econo-
mía" por la caída de las expectativas injustificadas de
valoración financiera de las nuevas empresas tecnoló-
gicas). Pero también es posible que el dinamismo del
modelo se vea limitado en su desarrollo por límites
debidos a los cambios en la economía mundial y al
agotamiento de los factores competitivos que coadyu-
varon al crecimiento en sus dos primeras fases, en los
ochenta y en los noventa. En otras palabras: ¿es soste-
nible el modelo chileno de desarrollo? ¿Puede consoli-
darse un ritmo alto de crecimiento, por encima de los
ciclos y las crisis coyunturales que pueda experimen-
tar? ¿Y puede esa sostenibilidad económica incorporar
criterios sociales y medioambientales que permitan a
Chile superar la ideología de la competitividad y el
consumo, fuentes de sentido excesivamente frágiles
para asegurar una trayectoria histórica colectiva?

LA SOSTENIBILIDAD DEL MODELO CHILENO DEMOCRÁTICO DE DESARROLLO

La sostenibilidad de un modelo de desarrollo se define
como la capacidad de preservar las bases sobre las que
se asienta el modelo a partir de la extrapolación lineal
de sus características. Pero se puede entender en varias
dimensiones como veremos a continuación.

a) Sostenibilidad social

El modelo se plantea como redistributivo e incluyente.
① Por un lado, ésta es una condición para la estabilidad
social. ② También es un elemento esencial para la forma-
ción de capital humano, mediante educación, salud y
condiciones de vida, además de ampliar el mercado in-
terno. Pero, fundamentalmente, es la legitimación esen-
cial que necesita un sistema para consolidarse en un
mundo turbulento en el que un país pequeño necesitará
constantes adaptaciones para las que el consenso social
en el país es esencial. Y ese consenso social sólo se puede
alcanzar mediante un reparto no demasiado injusto de
la riqueza generada. En ese sentido, ha habido progresos
sustanciales entre 1992 y 2002, tal y como se documenta
en los apartados precedentes, sobre todo en educación,
vivienda, infraestructura y equipamiento del hogar. Pero
hay cuestiones fundamentales no resueltas:

- Se mantiene una distribución desigual del ingreso
que está entre las más altas del mundo, aunque
posiblemente se haya reducido en el periodo de la
Concertación, si bien se han atenuado los efectos
de la desigualdad de la renta en las condiciones de
vida de las capas de menores ingresos, mediante
servicios sociales de salud y educación, seguro de
cesantía y subsidios monetarios.

- Se ha reducido sustancialmente la pobreza, pero más de un 18% de pobres en la población es todavía un nivel considerable, porque la línea de definición estadística de la pobreza se sitúa muy baja en términos de comparación internacional con países de mayor desarrollo.
- La calidad de la educación deja mucho que desear, sobre todo la calidad de la enseñanza privada, a todos los niveles, en particular universitario, tal y como apunta el Informe de la OCDE sobre la educación en Chile, dirigido por el Profesor Martin Carnoy de la Universidad de Stanford. La política liberal en educación no ha dado resultados de calidad.
- La atención primaria de salud es insuficiente y la cobertura no es universal en la práctica, introduciendo una fundamental desigualdad social.
- Los servicios públicos básicos son aún ineficientes y desiguales (menores prestaciones en comunas y regiones más pobres).
- La vejez no está garantizada desde el sector público y el sistema de pensiones privadas: a) es un mecanismo amplificador de desigualdad social; b) está sometido a la volatilidad de los mercados financieros globales. Por otro lado, el cuidado de ancianos se deja en gran medida a las familias. Aunque esto es socialmente deseable, debería ser una elección familiar, no una necesidad social. Es más, sin ayuda pública al cuidado a domicilio, las mujeres, que son las que lo asumen, lo podrán

asumir cada vez menos, en la medida en que incrementen su participación en el mercado laboral a niveles de países desarrollados.

- La transformación de la condición de la mujer plantea la necesidad de una política social y educativa de cuidado de los niños mucho más completa.
- La existencia de anacronismos en lo referente al aborto y al divorcio (a pesar de la reciente ley de divorcio del 2003, todavía llena de cortapisas ideológicamente sesgadas) sitúan en la ilegalidad familiar a una proporción importante de las nuevas generaciones chilenas.

Todo ello conduce a que el componente redistributivo del modelo, y por tanto su sostenibilidad social requiera un mayor esfuerzo presupuestario desde el sector público, así como una reforma de la relación entre producción y redistribución, entre productividad y capital humano, y entre competitividad y cohesión social. Pero también requiere de políticas de consenso y participación, así como reformas legislativas que modifiquen las instituciones al mismo nivel que el aparato productivo. Ahora bien, toda esta serie de medidas requiere más crecimiento, no menos, y mayor generación de riqueza, porque el bienestar social es caro. Al mismo tiempo, una reforma cualitativamente innovadora puede producir un modelo más eficiente y más generador de recursos sin necesidad de una elevación del porcentaje de inversión pública sobre el PIB a niveles

poco realistas. De ahí que reforma social y reforma del modelo de crecimiento están directamente ligadas.

b) Sostenibilidad ecológica

Sobre este tema hay datos insuficientes, contradictorios y altamente ideologizados. Pero hay elementos para decir que se ha superado la estrategia destructiva de recursos naturales característica de los ochenta (ver en particular los análisis de Guillermo Geisse, 1993). Como muestra podría citar el ejemplo, de amplia repercusión internacional, durante la dictadura, de la producción de harina de pescado para la exportación mediante la trituration directa de la pesca de arrastre sin selección previa de la pesca capturada. O la tala indiscriminada de los bosques del sur. O la contaminación incontrolada de las aguas por los vertidos mineros (Collados, 1999). Muchos de estos casos extremos han pasado a ser controlados mediante la presión del movimiento ecologista y las políticas de conservación del gobierno democrático. La contaminación atmosférica de Santiago, que alcanzó niveles de alta peligrosidad durante los ochenta, ha disminuido ostensiblemente.

La sostenibilidad ecológica no depende de lo que se produce sino de cómo se produce. La economía de recursos naturales puede ser de distinto tipo, tanto depredadora como respetuosa del medio ambiente, según la regulación gubernamental y las prácticas empresariales. En el contexto actual, la industria depredadora tendrá

dificultades crecientes en el mercado internacional por presión del movimiento ecologista sobre los gobiernos y la OMC. Por otro lado, en general, el modelo de desarrollo intensivo en información debiera permitir una utilización no destructiva de los recursos naturales, en contraposición al modelo extensivo en que se crece por cantidad de recursos extraídos más que por la adecuación en calidad y gestión a las condiciones del mercado mundial. Por ejemplo, la agricultura orgánica tiene cada vez más valor y más demanda en el mercado internacional. Y en este tipo de agricultura, la información y el marketing son fundamentales. Por consiguiente, la sostenibilidad ecológica del modelo también reposa sobre una acentuación de su carácter informacional.

c) Sostenibilidad económica

Lo que aquí se plantea es la capacidad del modelo chileno para acentuar su capacidad competitiva en un mundo en que el valor añadido depende del contenido de conocimiento e información de los productos, y servicios y de la eficiencia tecnológica y organizativa de la producción, distribución y gestión. En la medida en que Chile parece haber llegado al límite del modelo exportador competitivo basado sobre todo en menores costos de producción, necesita elevar su nivel tecnológico, de generación y aplicación de conocimiento y de procesamiento de información. O sea, necesita mejorar la productividad total de factores y hacer de dicho

factor la contribución decisiva al crecimiento económico. Esta no es una estrategia de apostar por sectores de alta tecnología, sino de utilizar alta tecnología y sistemas de información avanzados en todos los sectores de actividad. También es dependiente del desarrollo de nuevas formas organizativas de empresas-red, que dependen de la plataforma tecnológica de redes computadas.

Los sectores y las actividades de mayor competitividad pueden ser decididos por el mercado, en la medida en que haya una estructura empresarial flexible capaz de reaccionar a las oportunidades. Pero es necesario saber en qué medida se dispone en el país de las condiciones de producción que hagan posible dicha competitividad, a saber: desarrollo tecnológico, infraestructura tecnológica informacional y de conectividad, y recursos humanos adecuados, así como el sistema de financiación capaz de movilizar los proyectos empresariales que surjan en función de la demanda en el mercado mundial.

La sostenibilidad económica del modelo chileno depende fundamentalmente de tres factores:

- i) El mantenimiento de las condiciones de una economía abierta a la globalización de los mercados, contrarrestando las tendencias proteccionistas de los países desarrollados y asiáticos.

En este sentido, el tema fundamental es el de una política de acuerdos comerciales con distintas áreas económicas, incluida América del Sur. La política chilena de participación en distintos

acuerdos comerciales internacionales parece la adecuada, pero cada vez más será necesario compatibilizar las responsabilidades en cada alianza. Asimismo, la relación con la Organización Mundial del Comercio debería pasar a primer plano, por ser la única jurisdicción que puede tomar medidas que limiten las tendencias proteccionistas en todo el mundo. Chile gana en las situaciones de apertura máxima. Tal vez sea (junto con Hong Kong) el único país a quien objetivamente más favorece un régimen liberal en términos de comercio internacional (Estados Unidos es cada vez más proteccionista en la práctica).

- ii) La regulación de los flujos de capitales y el mantenimiento de un marco macroeconómico equilibrado para resistir la volatilidad de los mercados financieros globales.

Aquí se trata de mantener la disciplina fiscal y la capacidad de reacción de la política económica demostrada hasta ahora. Es importante profundizar la liberalización de los mercados financieros, sobre todo en la medida en que se mantenga un bajo nivel de deuda y una evaluación favorable de los inversores externos. Pero dicha liberalización debe ser acompañada de una capacidad de intervención flexible para desincentivar los flujos de capitales especulativos. Ello implica también una voluntad reguladora de los mercados financieros más determinada e imaginativa, puesto que

los mecanismos empleados para el control de flujos de capitales a corto plazo han sido ya contrarrestados por maniobras de los inversores especulativos.

iii) La transición tecnológica de recursos humanos y organizativa a un modelo informacional de desarrollo, basado en capacidad de generación de conocimiento, recepción de transferencia tecnológica y formación de fuerza de trabajo informacional.

Este es el punto débil de Chile, a pesar de los actuales esfuerzos, documentados por el informe de la Agenda Digital 2004-2006 (Agenda Digital, 2004). En este sentido, las evaluaciones de Brünner (2001; Brünner y Elacqua, 2003) muestran el retraso considerable de Chile en ~~tecnología~~, en I+D y en recursos humanos técnicos, profesionales y científicos con respecto a países europeos y asiáticos competitivos e incluso con respecto a los países líderes latinoamericanos, cuyas economías han crecido menos y con más contradicciones que la chilena. Así, en 2001:

— Chile estaba por detrás de Brasil, Argentina y México en graduados en ciencia y tecnología, estandarizados por población.

— Estaba por detrás de dichos países en producción científica, y la distancia con relación a México se había acentuado.

— El nivel de educación de la población adulta (herencia de tiempos pasados) es muy bajo, al

punto de que más de la mitad de la población no entiende lo que lee y no es capaz de hacer inferencias sobre la base del material que procesa.

— Chile tiene malas clasificaciones en los rankings de la comparación internacional de formación en matemáticas y ciencia (véase Gráfico 4).

— El porcentaje de población altamente competente en el manejo de información es menor del 2%, en comparación con el 23% de Finlandia o el 5% de Portugal.

— La calidad de la enseñanza universitaria parece deficiente en general. Un chileno con educación superior tiene un grado inferior de manejo de información escrita que una persona con formación secundaria en Irlanda, Portugal o la República Checa.

— La investigación está centrada en la universidad, pero frecuentemente desligada de la tecnología. Existe una mala opinión de las empresas acerca de las universidades, y se aprecia poca conexión entre ciencia y tecnología. Pero las empresas que tanto se quejan tampoco investigan: su contribución se situaba en 2001 en un 14,9% del gasto en I+D y sólo en un 6% del personal investigador, si bien es cierto que se aprecia un cambio de actitud del conservadurismo tradicional de las empresas chilenas, ya que ese 14,9% hay que contrastarlo con el 3,7% del gasto nacional en I+D que asumían en 1990.

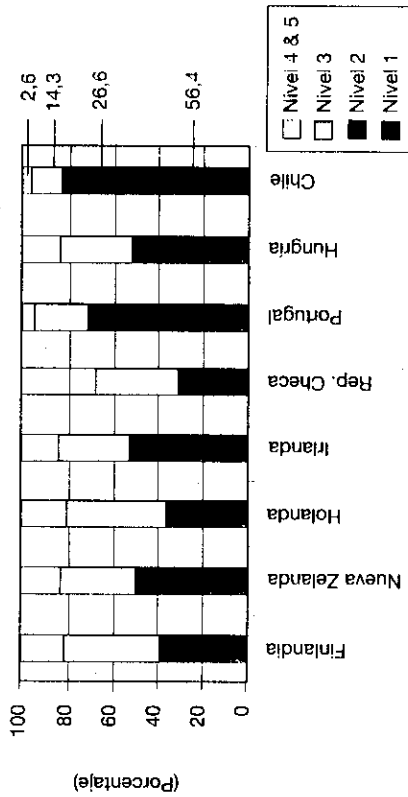
— En fin, en índices sintéticos de desarrollo tecnológico, Chile se situaba en 2001 en los últimos lugares con respecto al grupo de referencia que incluye países de industrialización reciente, situándose por detrás de México y Brasil en América Latina.

— Dicho retraso se refleja en la débil participación en las exportaciones de alta tecnología: la participación de manufacturas en las exportaciones chilenas es del 17% y de esas exportaciones, sólo el 4% representan bienes de alta tecnología, lo que equivale a la mitad de la proporción en Argentina, la tercera parte de Brasil y la quinta parte de México.

Sin embargo, esta observación tiene que ser matizada por el hecho de que se trata, en parte, de una inadecuada clasificación estadística, ya que se no se incluyen en las manufacturas las exportaciones de la agroindustria y la acuicultura industrial, que representan los sectores más dinámicos en las exportaciones chilenas, en particular en el caso del vino, el salmón y otras especies piscícolas.

GRÁFICO 4

Chile: Población con bajos niveles de competencias (% población 16-65 años por nivel de competencias cuantitativas)



Fuente: OECD (2000).

Sin embargo, es necesario señalar que en la última década Chile ha hecho un esfuerzo considerable en varios rubros esenciales del modelo informacional

- Desarrollo cuantitativo de la educación.
- Gasto en transferencia de tecnología incorporada, tanto por bienes de capital como por inversión directa extranjera, en donde se sitúa (en % del PIB) por delante de los otros países latinoamericanos aunque muy por detrás de los asiáticos.
- Gasto en Tecnologías de Información y Comunicación en donde, con un 5,74% del PIB, se

situía al nivel de Brasil o de Finlandia y muy por delante de otros países latinoamericanos. Esto se refleja en una difusión de computadoras (24%) e Internet (15%) en los hogares, muy superior a la de Latinoamérica. A fines del 2003, se estimaba que había un millón de hogares con computadoras, la mitad de ellos con acceso a Internet, así como 320.000 conexiones a banda ancha. Unas 100.000 empresas tenían acceso a Internet (Agenda Digital, 2004). Ahora bien, el acceso a las tecnologías de información y comunicación presentaba un alto índice de desigualdad social y regional, manifestándose claramente la existencia de una brecha digital. Así en las 10 comunas más conectadas (todas en el Oriente de Santiago) en 2003 existía Internet en 31,8% de los hogares, mientras que en las 100 comunas menos conectadas, la tasa de penetración de Internet en los hogares era inferior al 1%. De la misma forma, todas las grandes y medianas empresas tienen acceso a Internet, pero sólo el 40% de las pequeñas y el 15% de las microempresas.

- Desarrollo de telefonía fija y móvil, al nivel más alto en América Latina.
- Inversión pública en I+D. En este sentido, si bien el porcentaje de inversión en I+D sobre el PIB se sitúa a un nivel bajo con respecto a los países avanzados, el volumen de inversión se triplicó entre 1990 y 2000, creciendo en un 30%

anual y situándose en 461 millones de dólares en el 2000.

- Aumento notable del número de ingenieros y científicos dedicados a la investigación, que ha crecido a un promedio anual del 8,8% en la década de los noventa.

Ahora bien, la creación de infraestructura no incide en el desarrollo si no hay un sistema de innovación eficaz, si no hay internalización de innovación y tecnología en las empresas, si no hay generación de investigación aplicada en los sectores productivos y exportadores y si no hay una población laboral (y no laboral) equipada culturalmente para manejar la información.

Desde este punto de vista, en la medida en que otros países de menores costos comparativos compitan en los mismos mercados, incluido el chileno, el mantenimiento de un alto ritmo de crecimiento económico, con redistribución, sólo parece posible mediante la transición a un modelo informacional de desarrollo a partir de la corrección de las deficiencias que se observan en los rubros anteriormente citados. Con el fin de concretar la discusión en esta perspectiva, quisiera hacer referencia a los factores y mecanismos que subyacen en el desarrollo de las dos sociedades más avanzadas en el modelo de producción y gestión informacional, según las estadísticas de Naciones Unidas y del World Economic Forum: Estados Unidos (re-presentado en su versión de nueva economía por el modelo que denominó de Silicon Valley) y Finlandia,

Obviamente, el nivel de desarrollo de ambas sociedades se sitúa tan por encima del chileno que cualquier extrapolación directa de este análisis a las condiciones de Chile sería un grave error. Pero se trata de identificar aquellos mecanismos, factores y procesos que condujeron a la creación de sistemas de innovación y de producción informacional altamente dinámicos en áreas que, históricamente, estaban retrasadas con respecto a otras regiones en su propio contexto. En particular, Finlandia en los años cincuenta era un país pobre, dependiente del mercado soviético y especializado en líneas de producción y exportación primarias, sobre todo forestales. Ciertamente, su mayor nivel de educación y su capacidad de innovación tecnológica eran rasgos distintivos que se revelaron decisivos en su momento. Pero su momento llegó a partir de una crisis estructural de su economía, en 1991, precisamente ligada al hundimiento económico de la Unión Soviética. Es esa experiencia de transición de un modelo exportador primario e industrial tradicional a un modelo informacional competitivo la que puede ser útil para situar en términos concretos el debate sobre la transición productiva chilena.

EL DESARROLLO INFORMACIONAL REALMENTE EXISTENTE:

LECCIONES DE SILICON VALLEY Y DE FINLANDIA

El modelo de desarrollo informacional caracteriza las economías más dinámicas y competitivas del mundo

actual (Castells, editor, 2004). Entre ellas, y con permiso de Irlanda, Singapur, Tokio, Los Ángeles o New England, las experiencias más destacadas y maduras son las de Silicon Valley y Finlandia. Silicon Valley es conocida como la región más innovadora, dinámica y competitiva del mundo desde hace cinco décadas, el crisol de la revolución tecnológico-industrial informacional, el equivalente al Manchester del capitalismo industrial inglés de mediados del siglo XIX. Finlandia, una nación, pero cuya economía es mucho menor que la de la región en torno a San Francisco, se convirtió en el 2003 en la economía más competitiva del mundo, según el World Economic Forum, y en el país europeo de más alto crecimiento de la productividad entre 1996 y 2002, con una tasa media de incremento de la productividad del 3,5% anual, ligeramente superior al registrado en Estados Unidos durante el mismo periodo, el momento álgido de la nueva economía. Si bien la gama de innovación tecnológica de Silicon Valley es mucho más amplia y mucho más decisiva, Finlandia también está en la punta de la innovación mundial, y muy por delante de Silicon Valley en un campo tecnológico tan decisivo como la comunicación móvil, así como en otros sectores de telecomunicaciones. Por tanto, en términos de resultados económicos y tecnológicos, las dos experiencias son comparables y ambas se sitúan en la vanguardia mundial. En términos de condiciones institucionales, culturales y sociales, en cambio, los dos modelos de desarrollo son fundamentalmente distintos. Lo que muestra la diversidad institucional posible de los

procesos de desarrollo informacional (Castells y Himanen, 2002; Himanen y Castells, 2004). Pero hay algunos elementos comunes que pueden ofrecer enseñanzas para Chile, aun situándose a un nivel de desarrollo económico y tecnológico cualitativamente distinto.

1 El primer elemento es que en el corazón del proceso de desarrollo informacional se sitúa la capacidad del sistema de innovación de un país. Y que esa capacidad no se da de forma aislada en empresas o en instituciones sino que se origina y renueva en medios de innovación, territorialmente articulados, y conectados en redes telemáticas y de transporte con otros medios de innovación a escala global. La innovación se refiere a innovación de procesos, de productos y a la innovación tecnológica, cuyo soporte es necesario para la innovación organizativa (proceso) y de generación de bienes y servicios (producto). La innovación se articula en el sistema mediante la intervención directa e indirecta de actores institucionales. Aunque mecanismos de mercado son importantes para detectar sectores de actividad y nichos de mercado, todo sistema de innovación requiere, explícita o implícitamente, políticas públicas, así como la intervención de instituciones y organizaciones orientadas al desarrollo de la innovación y del país y no directamente motivadas por la obtención de ganancias a corto plazo. Cuanto más alejado de la vanguardia de la innovación está un país (como es el caso de Chile y como fue el caso de Finlandia hasta la década de los noventa) más importante es la acción institucional en la generación de mecanismos de innovación. La innovación

incluye un esfuerzo cuantitativo y cualitativo importante en investigación, público desde luego, pero también, y sobre todo, empresarial. Tanto en Silicon Valley como en Finlandia, las empresas asumen la mayor parte del gasto en investigación y una parte de dicha investigación es de largo plazo.

2 En segundo lugar, la calidad de las universidades y la efectividad de sus mecanismos de articulación con las empresas. Las universidades son importantes tanto por la producción y difusión de conocimiento como por la formación de los recursos humanos necesarios para el procesamiento y aplicación de información en base a dichos conocimientos. Cuando el sistema universitario es insuficiente, como lo era en Finlandia en los años setenta, es necesario un esfuerzo público para crear y mantener universidades y para desarrollar sus programas de investigación, de forma flexible y adaptada a los cambios del entorno. En Finlandia, el país pasó de 3 universidades a 21 universidades en 30 años. Y varias de las universidades de nueva creación se sitúan entre las más innovadoras de Europa, particularmente en las ramas de ingeniería. Pero no basta que haya excelencia universitaria. Es necesaria una articulación entre universidad, empresa y administración. Y cuando no existe, es esencial inducirla, como también fue el caso en Finlandia, mientras que en Silicon Valley se dio, sobre todo, por la estrategia de las propias universidades, en particular Stanford. De la misma forma, programas de investigación de la administración, en colaboración con empresas y universidades, son esenciales como formas

de crear nuevas oportunidades. Tal fue el caso de los programas de DARPA del Departamento de Defensa en Estados Unidos (entre ellos Arpanet, el antecesor de Internet) y de los programas de telecomunicación móvil en Finlandia. Ahora bien, la colaboración entre universidades y empresas no puede hacerse mediante el sometimiento de unas a otras: ni la empresa puede ser un simple sponsor sin arte ni parte en los procesos de investigación, ni las universidades pueden reducirse a departamentos de investigación aplicada de las empresas. Las universidades deben decidir y conducir su investigación de forma autónoma. Las grandes empresas saben que es así como se produce la verdadera innovación. Pero en la concepción y desarrollo de sus programas, debe incluirse una consulta permanente con el conocimiento acumulado en las empresas. Y, por otro lado, centros conjuntos de investigación pueden constituir el interfaz necesario para pasar de la concepción al producto. Tanto en Finlandia (inducido por el gobierno) como en Silicon Valley (de forma más oportunista y descentralizada) dichos mecanismos se fueron constituyendo a lo largo de los años.

3 En tercer lugar, la importancia de los recursos humanos en la economía informacional se traduce en la importancia de la educación y de las condiciones de vida de los trabajadores como fuente de trabajo productivo. Pero aquí los modelos existentes divergen fuertemente. En Finlandia, el Estado de bienestar ha sido decisivo en proporcionar trabajo de calidad y estable. En Silicon Valley, en cambio, con una educación pública deteriorada y una cobertura de

necesidades sociales muy insuficiente, la inmigración ha sido la forma esencial para obtener los recursos humanos necesarios. Inmigración tanto del resto de Estados Unidos como, sobre todo, del mundo, con una mención muy especial de India y China en lo que se refiere a ingenieros y científicos. Para aquellos países, como Chile, en donde el recurso a la inmigración de alta cualificación no parece poder constituir un mecanismo suficiente, es esencial contar con un sistema educativo, de salud y de desarrollo cultural de la población que vaya creando la base de una fuerza de trabajo informacional, tal y como ha sido el caso de Finlandia.

Se cita con frecuencia la existencia de una cultura emprendedora como elemento esencial del desarrollo. Es cierto, pero a condición de no esencializar o mitificar la figura del emprendedor, ni de asimilarlo a un determinado territorio. En Silicon Valley, los emprendedores fueron allí, no nacieron allí. Y fueron en búsqueda de las oportunidades de excelencia tecnológica y capacidad innovadora concentradas en dicha área. Y crearon pequeñas empresas, que luego se hicieron grandes y multinacionales. En Finlandia, la mayoría de los emprendedores se hicieron dentro de las grandes empresas, o de empresas consolidadas. Nokia fue reinventada desde dentro por un grupo de jóvenes directivos de la división de Móviles, cuando la empresa estaba quebrada en 1991. Y otras varias empresas fueron dinamizadas por empresarios que también eran emprendedores. Sólo más tarde se constituyó en Finlandia un tejido

empresario de pequeñas empresas. Por tanto, la cultura del emprendimiento puede tener distintas manifestaciones. Y, en general, es hija de la necesidad. Se emprende cuando no queda otra alternativa más que arriesgarse.

Pero no siempre se innova a partir de un emprendimiento orientado hacia la producción. Se suele confundir el emprendimiento con la innovación. Es distinto. La dimensión cultural de la innovación, en la sociedad de la información al menos, parece relacionada con lo que Pekka Himanen ha conceptualizado como *cultura hacker* (Himanen, 2001). Los hackers no son los malos de los medios de comunicación, temidos por los burócratas del gobierno: esos son los "crackers". Los hackers, según la terminología original del Artificial Intelligence Lab del MIT en los años sesenta, son los que innovan y crean movidos por la pasión de la creatividad, en todo tipo de actividades. Son particularmente importantes en la revolución tecnológica informática porque ésta se basa enteramente en la innovación y porque, empíricamente hablando, se puede demostrar que buena parte de dicha revolución, incluido Internet, fue desarrollada a partir de innovaciones de hackers, es decir de personas que crearon por el placer de crear y compartieron con los otros creadores y que difundieron gratuitamente por Internet los productos de su innovación, desde Vint Cerf y Robert Kahn con los protocolos básicos de Internet, a Linus Torvalds con Linux, pasando por Tim Berners-Lee y el worldwideweb browser. Es bien conocido que Silicon Valley fue, y es, un medio de

innovación basado en la iniciativa tecnológica y cultural de hackers, además de los legendarios emprendedores que aplicaron su capacidad creativa a ganar dinero. Pero es menos conocido, aunque igualmente cierto, que buena parte de la innovación tecnológica finlandesa ha sido obra de hackers, además del caso universalmente conocido de Linux (Castells y Himanen, 2002). Para el desarrollo de una cultura hacker, en la fuente de procesos de innovación, es esencial que haya libertad de crear y, también, que la información circule. Al mismo tiempo, el nivel de conocimiento cultural y tecnológico debe ser alto y sus campos de interacción fáciles y frecuentes. Ello se relaciona con un sistema universitario vivo, flexible y de calidad. Pero no sólo con ello. La interacción con el mundo del arte (como es el caso en Barcelona por ejemplo, pero sobre todo en Los Ángeles, San Francisco, Nueva York o Londres) es fundamental. En una palabra, la capacidad general de creatividad de una sociedad se constituye en fuerza productiva esencial en el modelo informacional.

En fin, la transformación de la creatividad y la capacidad de innovación en proyectos emprendedores generadores de empresas productoras de riqueza, requiere mecanismos adecuados de financiación del riesgo. En el corazón de todo sistema de innovación existe, bajo fórmulas diferentes, un sistema de capital riesgo (o capital semilla), en el sentido amplio del concepto. En Silicon Valley, los estudios que hicimos en la década de los noventa en el Instituto de Desarrollo Regional de la Universidad de California en Berkeley, demostraron

que las empresas de capital riesgo, generadas a partir de la riqueza acumulada en la región, fueron decisivas para el desarrollo de la innovación y para su concentración en Silicon Valley. En Finlandia, donde el capital riesgo era incipiente, el sector público llenó dicho vacío, pero funcionando como auténtico capitalista de riesgo, no mediante subsidios. En la mayor parte de casos exitosos de política regional centrada en la innovación, la financiación del emprendimiento se ha revelado como un mecanismo esencial (Zook, 2001; Castells y Hall, 1994; Castells y Himanen, 2002).

Los mecanismos identificados en las experiencias más avanzadas de desarrollo informacional no dependen del nivel económico o de la especificidad cultural. Otros elementos clave en Silicon Valley, Finlandia, Suecia o Irlanda, sí son específicos a sus contextos. Pero los mecanismos expuestos en esta sección son trasladables a otros contextos, por ejemplo al de Chile, a condición de traducir chips por salmón y congrio, nanotecnología por agrogénica o software para misiles en software libre para la educación parvularia. Ahora bien, el nivel educativo, la libertad de innovar, la creatividad cultural, la flexibilidad institucional y la financiación de la creación como proyecto empresarial, son condiciones necesarias para el nuevo modelo de desarrollo. Si un país no dispone de dichos componentes de desarrollo informacional agota paulatinamente sus reservas de productividad y competitividad, aun en los casos de grandes potencias maduras de la era industrial (como podría ser el caso de Japón o Alemania)

condenados a ser superados por grandes países neindustriales más competitivos, como China, India o Brasil. Si un país construye su proyecto productivo a partir de sus reservas culturales y educativas puede prosperar en la economía global informacional, aunando calidad de vida, crecimiento económico y capacidad de creación. ¿Utópico? Lo utópico es querer competir en base a bajos costos laborales en una economía en donde el valor añadido proviene esencialmente del conocimiento y la innovación aplicados a todos los ámbitos de la actividad.

Veamos pues cómo se sitúa Chile en ese contexto.

¿HACIA UN MODELO DE DESARROLLO INFORMACIONAL EN CHILE?

La incorporación competitiva en una economía informacional global es sinónimo de ser capaz de situarse en un mundo en el que la información, el conocimiento y la tecnología son las fuentes esenciales de productividad y competitividad. El desafío para Chile es asegurar un crecimiento sustancial de la productividad de las empresas (pero también de los servicios públicos) y traducir esa productividad en ventaja competitiva en una economía abierta, superando las desventajas de lejanía de mercados mediante una ampliación de sus mercados latinoamericanos y mediante un ratio calidad/costo competitivo en base a menores costos relativos en un sistema de producción altamente cualificado.

Un modelo informacional tiene que partir de las características específicas de un país y una economía, pero llegando a lo que son los elementos esenciales del modelo por vías propias, sin poder obviar esas palancas claves.

La comparación internacional presenta rasgos no aplicables: por ejemplo, la inmigración de todo el mundo como factor clave de talento y empresariado en Silicon Valley, los mercados militares o la articulación a universidades en la punta de la investigación mundial. O el avance, por razones históricas, en las telecomunicaciones inalámbricas en el caso de Finlandia. O la preferencia de las multinacionales electrónicas por una localización productiva dinámica como en los casos de Irlanda o Singapur. Pero otros elementos sí ofrecen posibles lecciones utilizables.

Una buena parte de los elementos básicos del modelo informacional está ya en vías de consolidarse en Chile (escolarización casi universal, administración pública eficiente y con niveles de corrupción bajos en términos comparativos, institucionalidad democrática, conectividad, mayoría de la población viviendo en condiciones de modernidad, etc.). Pero hay otros más cualitativos que no tienen suficiente desarrollo en Chile. Veámoslos.

En los dos modelos de referencia analizados, la innovación es esencial. Ese es la *principal falla del modelo chileno actual: el sistema de innovación presenta lagunas y deficiencias considerables*, a pesar de los progresos en inversión educativa y de investigación por parte del

gobierno y de la modernización tecnológica transversal planteada por la Agenda Digital. Aquí las tareas por hacer consisten en impulsar los siguientes elementos:

- Universidades o centros privados sin ánimo de lucro (fundaciones) con un nivel suficiente de excelencia como para estar en las redes mundiales del desarrollo científico y tecnológico. No se puede financiar todo ni competir en todos los campos. Hace falta apostar no por sectores, pero sí por campos tecnológicos, aprovechando ventajas específicas, por ejemplo investigación biológica, agropecuaria, marina. Tal vez desarrollo de software en código abierto (con los mercados públicos como estímulo). Conexión inducida entre universidades y empresas a través de la política pública, tal y como se desarrolló en Finlandia.
- Producción de stock de conocimiento y de talento, con personas formadas y con la capacidad de convertirse en emprendedores o en fuerza de trabajo innovadora. Lo cual implica un esfuerzo considerable en la mejora de calidad del sistema universitario y en su flexibilidad.
- Programas de cooperación científica con empresas multinacionales y con universidades de punta en el ámbito mundial en los campos de especialización seleccionados.
- Programas de becas en el extranjero para posgraduados chilenos, con reinserción garantizada en buenas condiciones en Chile.

- Atracción de empresas multinacionales negociando prioritariamente transferencia de tecnología, tal y como está haciendo China.
- Innovación significa libertad de creación y una cultura de la innovación. De ahí, la necesidad de una política de acción pública de valorización de la innovación.

Para que la innovación sea proyecto empresarial, hacen falta *emprendedores* (éstos no son sólo individuos, o impulsores de start-ups, son también agentes empresariales capaces de la reorganización de las grandes empresas, como demuestran los casos de IBM o Nokia). Chile tiene buenos empresarios, como se demostró en el sector agropecuario exportador. La cuestión es diversificar campos de emprendimiento, a partir de las oportunidades que vayan surgiendo. Para esto hace falta, simplificación administrativa; y, sobre todo, *mercados de capital riesgo*, si es necesario público pero no subsidiado, sino funcionando como capital riesgo (según el ejemplo de Sitra, la agencia pública de capital riesgo en Finlandia).

El desarrollo del trabajo informacional, de distintos niveles, quiere decir una *recualificación masiva de la fuerza de trabajo*. Esto implica fundamentalmente: a) Mejora de la educación, lo cual quiere decir esencialmente mejorar la cualificación y las condiciones de trabajo de los maestros. b) Mejora de la instituciones de enseñanza, en particular, regulación y acreditación de la enseñanza privada en base a criterios de calidad. c) Educación de

adultos de calidad (que incluye los cursos de reciclaje para maestros) mediante programas de educación virtual: un proceso de aprendizaje continuo a lo largo de la vida. Silicon Valley ha funcionado a pesar de un mal sistema público de educación gracias a la inmigración. Finlandia o Chile no tienen esa opción. La formación de las personas es la inversión esencial en el modelo informacional. La clave en este campo es articular la modernización tecnológica de la enseñanza con el nivel general de educación. Así, por ejemplo, en Chile, en 2004, el programa *Enlaces* facilitó que el 90% de los estudiantes de enseñanza media hubiese adquirido algún nivel de competencias en tecnologías de información y comunicación, pero se detectaron insuficiencias en la certificación de esas competencias, de forma que sus niveles son desiguales según los mecanismos de evaluación. De ahí la iniciativa del Gobierno chileno de implantar en 2004-2005 un modelo de nivelación de competencias a nivel de usuario. Asimismo, nuevas iniciativas se encaminan a introducir las tecnologías de información y comunicación en los currículos escolares, en lugar de mantenerlas en aulas especializadas con escaso impacto en la calidad de la enseñanza.

La cuarta lección fundamental proviene del modelo finlandés: el círculo virtuoso entre un Estado de bienestar orientado a la productividad y una economía productiva que puede pagar un Estado de bienestar en expansión. Esa es la frontera en donde el modelo chileno de desarrollo pasa de ser liberal a ser solidario, sin por ello perder competitividad. Productividad informacional como producto de

la calidad de vida de la población y de la capacidad de una población culturalmente desarrollada para encontrar nuevas formas y campos de innovación. Lo esencial en este sentido es la *transformación tecnológica y organizativa del sector público* (e-health, e-learning, e-governance) como base de productividad informativa en el Estado de bienestar. Los avances significativos de la administración electrónica en Chile se sitúan en este horizonte. Sólo cuando los ciudadanos perciban el beneficio de la tecnología para resolver los problemas de su vida cotidiana se interesarán por conocer y practicar las nuevas tecnologías, con el consiguiente incremento de eficiencia y de información en el conjunto de la sociedad. #

Así pues, la traducción del modelo informacional a las condiciones de Chile no implica convertir a Chile en un productor de electrónica o telecomunicaciones, aunque algunas líneas propias de producción en estos sectores siempre constituyen una fuente importante de valor añadido. Lo que quiere decir es que todo tipo de actividades, empezando por los sectores agroexportadores, piscícola, minero o de industria cultural necesitan incorporar conocimiento, investigación, tecnología, organización en red y capacidad de gestión de la información en su práctica empresarial. Un ejemplo puede ilustrar la estrategia así apuntada. Chile está desarrollando y aplicando tecnología de lixiviación bacteriana en la minería del cobre. De hecho, 5% de la producción de cobre se realiza ya por ese procedimiento. El perfeccionamiento de dicha tecnología permitiría

aumentar las reservas económicamente explotables del "suelo de Chile". Y a ello se dirige el Programa Genoma Chile en biominería, en una acción concertada del Gobierno, CODELCO y socios internacionales. Este programa tiene como objetivo el secuenciamiento e intervención del genoma de los microorganismos que participan en la biolixiviación del cobre, así como de nuevos microorganismos útiles para mejorar el rendimiento del proceso industrial.

Por otro lado, las universidades e instituciones científicas chilenas están cooperando con programas de investigación, impulsados desde el Gobierno, en áreas de particular importancia para Chile, tales como la biotecnología medioambiental (sobre todo en el tratamiento de aguas), la acuicultura (sobre todo en el desarrollo de nuevas especies y en la producción de vacunas para salmones), en la fruticultura y en la silvicultura clonal.

Sin embargo, iniciativas innovadoras como las mencionadas necesitan articularse a un sistema de innovación en donde la investigación se apoye en la educación y las empresas y administraciones utilicen los resultados de la investigación y los modifiquen en función de su práctica, en un sistema de relaciones entre investigación, innovación y aplicación. Y para ello es condición indispensable, además de un sistema de innovación en el sentido anteriormente definido, una rápida mejora cualitativa de la educación de la población, tanto de la población joven como de la ya establecida en la vida laboral, probablemente en este caso mediante la utilización de los nuevos sistemas de educación virtual.

Más allá del ámbito propiamente educativo, *el modelo informacional está directamente relacionado con el desarrollo cultural y la creatividad de la sociedad*. No necesariamente para desarrollar nuevas tecnologías sino para inventar nuevas formas de producir, de comunicar y de vivir. Porque, en el fondo, el modelo informacional es la capacidad social y personal de transformar la creatividad en fuerza productiva que permita a su vez el desarrollo de esa creatividad, en un círculo virtuoso entre el arte de vivir y la eficiencia de producir.

LA NUEVA FRONTERA DEL DESARROLLO CHILENO

El proceso de desarrollo chileno se enfrenta a la necesidad de evolucionar con el contexto global en el que se sitúa y a la maduración y cambio de los procesos en su propia sociedad. Para profundizar en la próxima etapa de ese desarrollo se requiere un salto cualitativo en la integración entre crecimiento económico y calidad de vida, buscando su sostenibilidad de forma simultánea en las tres dimensiones, social, ecológica y económica. Ahora bien, el paso de un modelo liberal, incluso democrático, a un modelo informacional basado en la solidaridad mediante un Estado de bienestar productivo, requiere una movilización de la sociedad chilena, *una movilización como colectivo, en la que el Estado sólo puede guiar el proceso si cuenta con una sociedad civil activa y con un proyecto de la nación como comunidad en un sistema global. ¿Es ello posible? ¿No ha*

perjudicado la hegemonía de la ideología del mercado como promoción individual las bases de la convivencia social como chilenos, más allá de las reglas del juego para proteger la autonomía de cada uno? ¿Se ha disuelto la identidad nacional? ¿Se afirman los fuertes como individuos y los débiles como comunidades defensivas propias?

En este sentido, el análisis del modelo chileno de desarrollo y de sus posibilidades implica investigar las condiciones culturales, sociales e institucionales que lo fundamentan, así como los grados de libertad que esas condiciones permiten para la nueva etapa de ese desarrollo en términos sostenibles.

IV. GLOBALIZACIÓN, ESTADO, IDENTIDAD
Y SOCIEDAD EN CHILE: 1990-2004

El desarrollo social económica y ecológicamente sostenible depende de la capacidad de la sociedad de movilizarse en ese proceso. En las condiciones de Chile ello implica, en primer lugar, la profundización de la democracia. Pero también la construcción social de un proyecto colectivo a partir de una identidad compartida. ¿Cuáles son las condiciones sociales e institucionales que se dan en Chile a este respecto? El tratamiento de este tema esencial, condicionante de las estrategias de políticas públicas en la raíz del desarrollo, requiere una discusión breve de los antecedentes históricos de la relación entre Estado, sociedad e identidad en Chile.

LA CONSTRUCCIÓN HISTÓRICA DE LA IDENTIDAD CHILENA

A lo largo de su historia la identidad colectiva fundamental de Chile ha sido la identidad nacional. Fue construida a partir del Estado. El Estado configuró la nación como principio de cohesión interna, por encima de las clases, y como principio de defensa frente al

exterior: los vecinos percibidos como amenazantes, las potencias económicas explotadoras y las empresas extranjeras. Naturalmente que también representó el Estado los intereses de las clases dominantes en cada momento histórico. Pero el principio constitutivo del Estado fue el de representar y articular a la nación chilena como comunidad frente al mundo exterior. La formación de un ejército profesional y de una administración pública eficiente y regulada fueron elementos esenciales del reforzamiento del Estado frente a los diversos grupos de intereses. La legitimidad del Estado así constituido descansó sobre un triple principio: fue un Estado democrático, aun con las restricciones a la democracia características de cada contexto histórico; fue un Estado de institucionalidad generalmente respetada a lo largo de su historia (aunque Balmaceda estaría en desacuerdo con esta apreciación), en particular con unas FF.AA. cuya actitud relativamente constitucional contrastó con las del resto de América Latina; fue un Estado democrático-populista que integró a las clases medias burocráticas y a los sectores populares organizados mediante una política clientelista, a partir de la captación por el Estado de las regalías de las empresas explotadoras de las riquezas naturales del país. Durante la administración demócratacristiana de los sesenta este modelo se profundizó y se hizo populista-participativo mediante las reformas agraria y urbana y el desarrollo de movimiento campesino y movimiento poblacional junto al movimiento sindical. El intento de pasar de un modelo populista a un experimento de

socialismo democrático sin apoyo mayoritario de la población y en las difíciles condiciones geopolíticas de América Latina fue abortado por el sabotaje económico, la desestabilización política apoyada por Estados Unidos y el golpe militar antes de que el Estado pudiese redefinir su relación con una sociedad movilizada y polarizada (Touraine, 1989).

LA DICTADURA DE PINOCHET: RUPTURA DEL MODELO CLÁSICO ESTADO-SOCIEDAD-IDENTIDAD

El golpe militar destruyó no sólo la democracia sino el modelo de Estado y la relación Estado/nación. El Estado se separó de la nación y se hizo Estado de clase y corporativo militar. La nación se fraccionó entre clases y entre vencedores y vencidos. El Estado se convirtió en realidad en vasallo de Estados Unidos (inspirador del golpe) y se alineó en función de la política de bloques en América Latina y en el mundo.

El intento de reconstrucción de la legitimidad por parte del gobierno militar, más allá de sus bases de apoyo directas, se hizo en dos ámbitos: a) Mantenimiento del orden y defensa de los valores tradicionales (cristianismo conservador, moralidad castrense, anticomunismo). Pero esto sólo convence a los convencidos y a los asustados y por tanto no fue efectivo como fuente de legitimidad. b) Crecimiento económico mediante la liberalización de la economía y la privatización del sector público, con distribución de beneficios

a través del mercado, aceptando la exclusión social de buena parte de la población. Esta segunda estrategia sí funcionó para una proporción significativa de la población que vio mejorar sus condiciones económicas en comparación con su experiencia pasada. Así, la práctica del Estado de la dictadura rompió, como ideología, aunque no totalmente en la práctica, con el clientelismo como forma de legitimación, con excepción del clientelismo corporativo que benefició a las propias Fuerzas Armadas. El Estado delegó su principio de legitimidad en el funcionamiento del mercado. En esas condiciones, la ideología del mercado reemplazó a la de la nación. La pertenencia a la nación se fragmentó y la relación entre nación y Estado fue sustituida por la relación entre individuo y mercado, bajo la dirección del Estado, en nombre de una nación que se convirtió en referencia puramente ideológica. Se diluyeron también las identidades regionales y locales, se pasó de las culturas locales y regionales con nombres propios a Regiones administrativas numeradas como legiones romanas.

La subsiguiente crisis del Estado militar se produjo por su incapacidad de institucionalizar su dominación bajo la forma de legitimidad democrática liberal excluyente, tal y como era su proyecto. Es decir, el dinamismo del mercado no fue suficiente para estabilizar la relación Estado-sociedad una vez pasada la situación de emergencia. Y la represión no sirvió contra las clases medias urbanas y sus actores políticos cuando la amenaza de guerra de clase ha desaparecido. El régimen militar, enfrentado a la creciente oposición de los sectores

populares y las clases medias, intentó re-legitimarse mediante un referéndum a su medida. De hecho subestimó la profunda transformación cultural y política que el país había experimentado. El ansia de libertad era ya más fuerte que el miedo a quienes la negaban. Y así se abrió la transición democrática (Garretón, 2003).

LA RELACIÓN ESTADO-NACIÓN EN LA TRANSICIÓN DEMOCRÁTICA

Los gobiernos de la Concertación negociaron con los poderes fácticos el mantener sus privilegios y derecho de veto a cambio de aceptar la democracia política. A partir de ahí, los partidos de la Concertación buscaron una nueva legitimidad basada en la continuidad de la legitimidad del mercado como principio de proyecto personal en el marco de una legitimidad democrática del Estado. Pero añadieron un correctivo fundamental: el Estado dejó de ser instrumento de exclusión para ser instrumento de integración, mediante políticas sociales de redistribución y mediante la creación de un sistema de relaciones industriales, así como de una nueva organización institucional de la relación sociedad-Estado. No se restableció la identidad nacional en la práctica como principio de legitimidad porque la nación siguió dividida, con las clases dominantes y las Fuerzas Armadas construyendo su propio sistema de legitimidad y con escasas posibilidades de competir en el Estado democrático, precisamente por su negativa a aceptar

reglas del juego comunes, al menos hasta 1997. En esas condiciones, la identidad se individualizó y fraccionó según las oportunidades que el mercado y el sistema de redistribución ofrecieron a cada uno. La nación siguió separada del Estado y el Estado actuó sobre la base de una triple legitimidad y dentro de un límite. El límite, el sistema de libertad vigilada constitucional. La triple legitimidad: construcción gradual de la democracia; reconocimiento de los actores sociales y políticas redistributivas; y, sobre todo, continuidad del crecimiento económico y mantenimiento del mercado como principio común aceptado por toda la sociedad. Por eso la ideología del mercado es la ideología de base, porque es la única que incluye a casi todos especialmente cuando, merced a las nuevas políticas económicas y redistributivas, extendió su valor práctico a las clases populares. Se esbozó también tímidamente una revalorización de las identidades locales. La sociedad civil construyó incipientes movimientos sociales (ecologismo en particular) y, sobre todo, se rearticuló un tejido asociativo autónomo.

Pero la recesión de 1999, aun leve, evidenció los límites del mercado como única fuente de apoyo. El importante Informe de Desarrollo Humano de Chile realizado por el PNUD en 1999 mostró en esos momentos la inseguridad subjetiva como problema fundamental de los chilenos (IDH, 2000). Si el mercado es lo único y no lo soluciona todo, se plantea un problema de inseguridad pero también de identidad. Para considerarse proyecto individual hay que poder sostenerse individualmente.

Hay privatización del riesgo, como diría Ulrich Beck, pero sin capacidades objetivas para asumir ese riesgo entre amplios sectores de la población. Como escribió Tironi (2003): “La contracción del crecimiento tuvo efectos que trascendieron lo estrictamente económico, especialmente para una amplia clase media que no contaría ya —como antaño— ni con la protección estatal ni con el apoyo de redes comunitarias extinguidas a consecuencia de la individuación y competencia que acarrió la violenta modernización de los ’90. (...) Esto provocó (en 1999) una suerte de síndrome de privación, con sus consecuencias: frustración, pesimismo, angustia, depresión” (2003: p. 32).

En esas condiciones se planteó, a finales de los noventa, el debate sobre el “malestar chileno”, a partir de la crítica de la ideología del mercado como único aglutinante y de la constatación de la pérdida de identidad nacional, solidaridad social y proyecto colectivo (IDH, 2000; Garretón, 2003). Fue, sin embargo, una crítica minoritaria en la medida en que el mercado funcionaba para una proporción importante de la sociedad, en la medida en que había mejora de las condiciones de vida y en la medida en que se mantenía una actitud precavida frente al peligro de involución democrática. Además, el debate estuvo marcado por la nostalgia de un pasado míticamente comunitario y por la frustración de la izquierda con una prudencia política considerada excesiva. En términos generales, la crítica de izquierda a la Concertación no caló en la población pero suscitó un debate entre las elites del régimen democrático. En cierto modo, a través de ese debate se apuntó a la fragilidad

de un modelo de relación entre Estado y sociedad que descansaba primordialmente en el crecimiento económico al que se añadieron, durante la década de los noventa, las políticas redistributivas y el diálogo social. A partir de 2000, aunque no fuese necesariamente una respuesta al debate planteado, se produjo una inflexión en la política de los gobiernos de la Concertación, en el sentido de acentuar los contenidos sociales, culturales y políticos del proyecto democrático, aun manteniendo los ejes esenciales del modelo de desarrollo incluyente (Ottone, 2003). Habiendo consolidado tanto el desarrollo como la democracia, el Estado chileno pudo plantearse la reconstrucción de la nación.

LA RECONSTRUCCIÓN DE LOS VÍNCULOS SOCIEDAD-ESTADO-IDENTIDAD

Como suele ocurrir, la crisis de 1999 indujo una recomposición de iniciativas políticas y sociales, que revelaron que había más reservas de lo que se creía en la sociedad chilena. En los primeros años del nuevo siglo maduraron una serie de procesos de cambio social, cultural e institucional que se habían ido gestando a lo largo de la transición democrática, hasta configurar una sociedad chilena muy distinta de la que salió de la dictadura (IDH, 2002).

Así, las encuestas del Centro de Estudios Públicos en 2000/2001 revelan que en la sociedad chilena actual la ideología de mercado no es fundamentalmente consumista, excepto en un sector reducido de la clase

media alta. Más bien, en la fracción mayoritaria de los encuestados se manifiesta una ideología individualista cercana a la ética protestante: esfuerzo propio, trabajo y, sobre todo, educación, como vía de mejora individual y colectiva. Es decir no es una sociedad de consumo sino de desarrollo individualista. Por tanto, se respondió a la percepción de crisis redoblando el esfuerzo individual y preocupándose de la educación de los hijos. Es más, el individualismo como actitud dominante no acabó con el capital social existente en Chile. De hecho, la capacidad asociativa de la sociedad chilena es relativamente importante, tanto en términos de asociaciones formales como de redes informales, como documentó el Informe de Desarrollo Humano del 2000. Sin embargo, el capital social está desigualmente distribuido: es mayor en los grupos socioeconómicos de nivel medio y alto, por lo que hay el peligro de que los pobres y las clases populares no dispongan de recursos ni a través del mercado ni a través del capital social. De ahí la importancia del esfuerzo redistribuidor del Estado documentado anteriormente. En la medida en que se reduce la inseguridad económica, merced a las políticas de educación, salud, seguros de cesantía y pensiones, así como a través de programas sociales dirigidos a los sectores más necesitados (Plan Auge en salud, Programa Chile Solidario, entre otros), el bienestar de las personas no pasa a depender exclusivamente del funcionamiento del mercado. La combinación de la recuperación, a un nivel moderado, del crecimiento económico y la acentuación de las políticas redistributivas

podría explicar la superación del "malestar chileno" que se manifestó a fines de los noventa. Las encuestas del CEP muestran que mientras en mayo de 1999 tan sólo 19% de chilenos pensaban que "el país está progresando", dicha opinión era compartida en el 2004 por un 50% de los encuestados. Asimismo, según el CEP, en 2004 el 35% de los entrevistados pensaban que su situación personal en el futuro sería mejor y sólo un 9% que sería peor. Otras encuestas señalan que más del 60% de los chilenos en 2004 declaraban esperar que su situación futura sería "igual de buena o mejor". En suma, pareciera que el momento de crisis psicológica de finales de los noventa fue superado, en parte, mediante una intensificación de las políticas sociales de acompañamiento al desarrollo económico.

Sin embargo, hay factores culturales e institucionales que parecen ser tanto o más importantes que los económico-sociales en la reconstrucción de la cohesión social en Chile y, por tanto, en su gobernabilidad. En particular, cabe señalar un cambio cultural profundo sobre todo, pero no sólo, entre las nuevas generaciones chilenas. Chile es hoy día una sociedad tolerante, en donde la libertad individual, la afirmación de los derechos humanos, la libertad de expresión y el respeto de los demás son valores mayoritarios. Esa nueva cultura de libertad ha proporcionado el apoyo ciudadano necesario a una serie de medidas legislativas y acciones de gobierno que han institucionalizado una nueva forma de ser y de pensar, en ruptura con el arcaísmo de los estamentos dominantes tradicionales. Al mismo

tiempo, el nuevo marco legal ha estimulado el ejercicio de las libertades personales y culturales en toda su gama. En este ámbito cabe citar la ley de divorcio aprobada en 2003 (a pesar de ser muy restrictiva en comparación con los países de Europa o Norteamérica); la abolición de la pena de muerte; la supresión de la censura; las medidas de protección para personas afectadas por el SIDA; la ayuda pública a la creación cultural, artística, cinematográfica. Expresión de ese cambio cultural e institucional es el debate abierto sobre temas considerados tabú hasta épocas recientes, en particular, en torno a la sexualidad o a la prevención del embarazo mediante la píldora del día después, si bien la cerrazón de la influyente Iglesia católica sigue bloqueando una legislación del aborto a la altura de una sociedad desarrollada como la chilena. Un indicador revelador de la apertura cultural de Chile en los últimos años es la explosión de creación literaria, cinematográfica y teatral. Así, la edición de nuevos libros en Chile pasó de unos 1000 títulos en 1992 a 3800 en 2003. En teatro, se estrenaron 120 obras en Santiago en 2003 frente a menos de una decena a inicios de los noventa. En cine, de la no existencia (un solo largometraje en 1997) se pasó a ocho estrenos anuales en 2000-2003, con obras de tanto calado como "Machuca", sobre el ambiente social y político de los años setenta. En 2003, el cine chileno atrajo al 13% de los espectadores, escaso porcentaje, pero que hay que comparar con el 1% de 1997. El cambio también ha llegado a los medios de comunicación, sobre todo a una red diversificada e influyente

de emisoras de radio. Y si bien los grandes medios de prensa continuaban en manos de grupos conservadores con un fuerte sesgo ideológico en su información, nuevas revistas, menos convencionales o abiertamente crí-ticas, como "7+7", "El Periodista", "Plan B" o "The Clinic", han ampliado sustancialmente el espectro de opinión y de expresión. La televisión chilena, poco innovadora aún en los canales de propiedad pública, ha empezado también a reflejar la realidad nueva del país, tanto en pluralismo ideológico como en apertura temática y cultural. Y el periodismo de investigación, aunque tentado por la política del escándalo, está asentándose en términos de seriedad suficiente como para poner sobre aviso a una élites sociales y políticas que se consideraban antaño por encima de toda sospecha.

Este cambio cultural tiene profundas consecuencias políticas. Porque una sociedad de libre expresión, basada en ciudadanos conscientes de sus derechos y con instituciones capaces de proteger el ejercicio de esas libertades, es incompatible con los abusos de poder y las violaciones de esos derechos, presentes, futuros o pasados. Y esa es exactamente la situación de Chile en estos momentos.

DERECHOS HUMANOS, JUSTICIA Y DEMOCRACIA

La transición democrática en Chile se hizo en condiciones de libertad vigilada mediante los dispositivos legales y fácticos establecidos por el dictador Pinochet a

cambio de ceder a la voluntad democrática expresada en el plebiscito de 1988. Ello ha sido motivo de frustración en Chile y en el mundo entre quienes no podían olvidar los crímenes de Pinochet y sus seguidores. Muchos otros países han tenido que pasar por esa nacionalización de la impunidad, que no del olvido, desde la España democrática a la Suráfrica de Mandela, pasando por la Argentina de la ley de punto final. Pero, en realidad, la democracia chilena ha hecho una andadura considerable en la recuperación de la memoria histórica y en el ejercicio de la justicia, separándola de la venganza y administrándola a través de las instituciones. Porque esa es la práctica de la democracia: restablecer la confianza en las instituciones, en particular en los tribunales de justicia.

La afirmación de los derechos humanos y la depuración de responsabilidades con respecto a su violación estuvo presente desde el principio de los gobiernos de la Concertación democrática. El 24 de abril de 1990 se creó la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación. El informe de la llamada Comisión Rettig al Presidente Aylwin documentó los casos de 2.298 personas asesinadas o desaparecidas durante la dictadura. La Comisión tuvo constancia de numerosos casos adicionales, que se excluyeron del informe para centrarse en el esclarecimiento de casos en donde podía probarse irrefutablemente el crimen cometido. Posteriormente, nuevas investigaciones ampliaron el número de víctimas. Como resultado del trabajo de esta Comisión el 8 de febrero de 1992 se creó la Corporación Nacional de Reparación

y Reconciliación como reconocimiento de la responsabilidad del Estado en la reparación de los derechos de las víctimas de la violación a derechos humanos y para contribuir a la identificación y procesamiento judicial de sus culpables. Se inició así un largo vericuetu judicial y político que tuvo su punto de inflexión en Chile (en paralelo con el procesamiento judicial internacional a Pinochet) en la Mesa de Diálogo creada en agosto de 1999 con 24 miembros representantes de instituciones éticas y religiosas, organizaciones de la sociedad civil, abogados de derechos humanos y los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas y de Carabineros. En el acuerdo firmado por esa comisión se adoptó el compromiso de todos los sectores participantes de contribuir a encontrar los restos de los detenidos desaparecidos o esclarecer su destino; se estipuló la necesidad de normas para acceder a la información y las sanciones para quienes obstruyeran a la justicia en este propósito; y las Fuerzas Armadas se declararon dispuestas a entregar cuanto información estuviese en su poder. A partir de estos acuerdos se inició una serie de acciones judiciales y se creó un nuevo contexto de consenso político que desembocó en la propuesta presidencial sobre derechos humanos de agosto de 2003, bajo el lema "No hay mañana sin ayer", en una declaración explícita de que la democracia no se puede construir sobre la amnesia histórica. En esa declaración, el Presidente Lagos enumeró una serie de acciones institucionales y legislativas, la más significativa de las cuales fue la Comisión

Nacional sobre Prisión Política y Tortura, creada el 11 de noviembre de 2003 para establecer los hechos relativos a quienes sufrieron privación de libertad y torturas por razones políticas entre septiembre de 1973 y marzo de 1990. Dicha Comisión presentó sus conclusiones el 10 de noviembre de 2004. El documento recogió el testimonio de 35.865 personas residentes en Chile y el extranjero. De ellos, 28 mil testimonios fueron aceptados como válidos, y los restantes tendrán el derecho a que su situación sea reconsiderada por la Comisión, la cual volverá a estudiar esos antecedentes y tomar sobre ellas una decisión definitiva. En este Informe se aborda el contexto en que se produjeron las detenciones y las torturas; se examinan los diferentes periodos de la represión; se identifican los métodos de tortura utilizados; se hace un catastro de los recintos de detención; se analiza el perfil de las víctimas; se señalan las consecuencias que los tormentos tuvieron para los detenidos y sus familias; y, por último, se presentan propuestas de reparación. Este Informe constituye una experiencia sin precedentes en el mundo, pues reconstruye —31 años después— un cuadro completo de la represión perversa que Pinochet practicó contra sus conciudadanos. A través de esa reconstrucción se busca crear las condiciones para recomponer la memoria colectiva del pueblo chileno.

El camino de las reparaciones para las víctimas se construyó a través de múltiples formas, con el fin de atenuar en parte los estragos de la represión. Tres líneas de reparación fueron presentadas. En primer lugar, las

medidas institucionales, mediante la creación del Instituto Nacional de Derechos Humanos que promoverá a través de la educación el respeto por los derechos humanos, a la vez que se hará cargo del patrimonio y la confidencialidad de la información acumulada desde la Vicaría de la Solidaridad hasta el trabajo de esta Comisión. En segundo lugar, medidas simbólicas y colectivas que expresan el reconocimiento moral del Estado y la sociedad hacia las víctimas, así como medidas jurídicas que prevengan la repetición del horror de una experiencia similar para las actuales y futuras generaciones. En tercer lugar, medidas de reparación individual, que se expresan tanto en el ámbito jurídico como en el económico. Las medidas de reparación jurídicas se refieren básicamente al restablecimiento de la honra pública de estas personas que las más de las veces fueron acusadas de delitos que nunca cometieron, y al restablecimiento pleno de todos sus derechos ciudadanos.

En el ámbito económico, la reparación consiste en el pago a las víctimas de una pensión que les ayude a tener una mejor calidad de vida en los años que tienen por delante. En educación, todas aquellas víctimas que por razones de la prisión o la tortura vieron interrumpidos sus estudios, serán garantizadas por el Estado la continuidad gratuita de sus estudios, sean ellos de nivel básico, medio, o superior. En salud, todas las víctimas consignadas en el Informe tendrán gratuidad en la atención institucional y serán beneficiarios del Programa de Rehabilitación y Atención Integral de Salud.

Además, el Estado garantizará los apoyos técnicos y la rehabilitación física necesaria a aquellas víctimas que hayan quedado con problemas físicos como consecuencia de la prisión o la tortura. En vivienda, las víctimas tendrán un tratamiento preferencial para acceder a los beneficios de vivienda. En 2004, un total de 80.000 personas recibían beneficios diversos en base a la Ley de Exonerados Políticos y una reforma de la ley amplió su supuestos de protección permitió el examen de otros 120.000 nuevos casos de posibles beneficiarios.

No menos importante, en el aspecto simbólico, fueron las obras memoriales de reparación, tales como el memorial a los obreros agrícolas asesinados en Liqueine, el memorial a los madereros asesinados en Chihuío, el recordatorio en Neltume a los trabajadores asesinados en Panguipulli, el memorial de los desaparecidos y ejecutados políticos en el Parque de la Paz que fue durante el Gobierno militar el Centro de torturas Villa Grimaldi en Santiago, el Parque por la Paz en Temuco, el Memorial Por la Vida y la Justicia en el Cementerio de Valdivia, el memorial en Copiapó a los desaparecidos y asesinados durante el gobierno militar en la Tercera Región. Actos particularmente significativos en este proceso de recuperación de la memoria colectiva, afirmación de los derechos humanos, reparación de las injusticias y reivindicación de la historia democrática de Chile fueron, en el 30 aniversario del golpe militar en septiembre del 2003 el homenaje institucional al Presidente Allende y el tributo público a la memoria de Víctor Jara. Así se han ido creando las bases para que

la nación se reúna en torno a una memoria común fraccionada pero no negada, conflictiva pero asumida. En la vertiente judicial del restablecimiento del respeto a los derechos humanos, en 2004 había 380 procesos abiertos por violación de derechos humanos durante el periodo de la dictadura y se encontraban procesados 311 agentes del Estado inculcados en crímenes de asesinato y desaparición de 515 víctimas. El Ejército contaba con 146 procesados, entre ellos 21 generales y 6 brigadieres. Cumplían condena (aunque en condiciones bastante confortables), entre otros, los dirigentes de la sinistramente célebre DINA Manuel Contreras, Álvaro Corbalán y Carlos Herrera Jiménez.

El Informe de la Comisión sobre la Tortura en noviembre de 2004 y las propuestas del Presidente Lagos tuvieron una enorme repercusión en la sociedad chilena, suscitando el apoyo de la gran mayoría de ciudadanos en su forma y contenido. Los partidos políticos, las organizaciones sociales y empresariales, los medios de comunicación acogieron con consternación la verdad ocultada por tanto tiempo. Pocos fueron los que pusieron en duda lo revelado. En ese contexto, la reacción más significativa fue la del Ejército, que reconoció su responsabilidad institucional a través de un documento difundido de su Comandante en Jefe en noviembre de 2004, previamente a la presentación del Informe de la Comisión sobre la Tortura. En él se señala, entre otras cosas:

“¿Excusa el escenario de conflicto global las violaciones a los derechos humanos ocurridas en Chile? Mi respuesta es una e inequívoca: no. Las violaciones a los

derechos humanos, nunca y para nadie, pueden tener justificación ética. (...) Se trata, sin embargo, de una época y de una manera de existir, como pueblo y como Nación, que se ha dejado atrás. Por ello, como Comandante en Jefe del Ejército, he volcado una parte importante de mi cometido a adecuar a la institución a la realidad de un Chile que aspira al desarrollo, la cooperación y a la paz internacionales; a la realidad de un país —el nuestro— que hace suyos los principios y valores de la democracia como sistema político y del respeto a la dignidad del ser humano como el elemento vital para una sana convivencia nacional e internacional. (...) Reflexión especial merece la irreversible decisión del Ejército de asumir las responsabilidades que como institución le cabe en todos los hechos punibles y moralmente inaceptables del pasado. Además, ha reconocido en reiteradas oportunidades las faltas y delitos cometidos por personal de su directa dependencia; las ha censurado, criticado públicamente y ha cooperado permanentemente con los tribunales de justicia para, en la medida de lo posible, contribuir a la verdad y a la reconciliación. Asimismo, se ha condecorado por los sufrimientos de las víctimas de estas violaciones, reconociendo que recibieron un tratamiento que no se condice con la doctrina permanente e histórica de la institución. Unas violaciones que no justifica y respecto de las cuales ha hecho y seguirá haciendo esfuerzos concretos para que nunca más vuelvan a repetirse. Expresión de esta línea de conducta ha sido nuestra concurrencia a la Mesa de Diálogo y el esfuerzo de

recopilación de información útil y conducente para establecer el destino final de los detenidos desaparecidos, así como su remisión a los tribunales, únicos encargados de establecer la verdad jurídica y aplicar la legislación vigente. Y al mismo estilo de conducta ha correspondido, más recientemente, nuestro decidido compromiso y colaboración con la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, cuyo contenido y conclusiones asumiremos con la misma serenidad y responsabilidad con que hemos actuado hasta ahora."

El resto de las ramas de las FFAA. y Carabineros fueron más ambiguas en su actitud, pero ninguna de ellas cuestionó el Informe de la Comisión sobre la Tortura ni los planteamientos del Presidente Lagos.

En cuanto a la persona del dictador, su farsa trágica y sus peripecias judiciales están registradas en todas las mentes y en los medios de comunicación mundiales. Pero lo más significativo, tras su primera declaración de demencia por los tribunales, fue, en 2004, el desafuero de un Pinochet desafiante-televisivo por la Corte de Apelaciones de Santiago así como el descubrimiento de sus millonarias y fraudulentas cuentas en dólares en el Banco Riggs. En último término, el juez Guzmán decidió el procesamiento del dictador por su participación en los asesinatos de la Operación Cóndor, siendo respaldado en su decisión por la Corte de Apelaciones de Santiago y por la Corte Suprema. Estos hechos deslegitimaron al dictador y a sus incondicionales frente a sus propios seguidores, conduciendo a la derecha chilena a romper las amarras con un pasado

vergonzoso para intentar integrarse plenamente en el Chile democrático con posibilidades de competir políticamente. Aunque Pinochet morirá en su cama, lo hará como procesado por la justicia de su país, escudado en la demencia y en medio del oprobio y el rechazo no sólo del mundo entero sino de la inmensa mayoría de los chilenos.

En fin, no menos importante en términos del futuro político de Chile es el hecho de que, en octubre 2004, el Senado chileno aprobó importantes reformas constitucionales que normalizan el funcionamiento de las instituciones democráticas. Dichas reformas, cuyo alcance se resume en la Tabla 6, implican la eliminación de los senadores vitalicios y de designación directa, sometiendo el conjunto del Senado al procedimiento de elección popular. Además dichas reformas refuerzan la institucionalidad de la ley electoral y restituyen a la Presidencia de la República la capacidad de nombrar y destituir a los jefes de las Fuerzas Armadas y Carabineros, acabando así con el mecanismo de autonomía del poder militar con respecto al civil que Pinochet había querido perpetuar para la protección corporativa de las Fuerzas Armadas. Una protección que las actuales Fuerzas Armadas chilenas ni necesitan ni quieren, según las informaciones disponibles.

Es importante señalar que la aprobación de estas reformas se hizo por consenso entre el gobierno, los partidos de la Concertación, y los partidos de la oposición. Así pues, según todos los indicios, la transición política chilena se ha completado.

IDENTIDAD NACIONAL Y PLURALIDAD DE IDENTIDADES

En muchos países de América Latina, la crisis de la identidad nacional ha conducido a un auge conflictivo de aquellas identidades étnicas, territoriales o religiosas que proporcionan sentido y protección a las personas en momentos de incertidumbre. En Chile también se ha manifestado un auge creciente de identidades minoritarias, en particular de las identidades indígenas mapuche, aymara y atacameña. Identidades que se afirman tanto en lo cultural como en lo económico y lo político, incluyendo el derecho a la tierra y al autogobierno comunitario en la afirmación de la identidad. Los gobiernos de la Concertación en Chile crearon canales de expresión para esas identidades y de reivindicación de esos derechos durante la década de los noventa. El resultado es que, aun dándose conflictos sociales e invasiones de tierras en algunos lugares y en momentos puntuales, la cuestión indígena en Chile se caracteriza por una apertura del Estado y la sociedad hacia la pluralidad cultural más que por el enfrentamiento entre los pueblos originarios y el resto de los chilenos. De hecho, la construcción de una nueva relación con las minorías indígenas se planteó en los gobiernos de la Concertación incluso antes de asumir la Presidencia Patricio Aylwin, mediante la firma del Acuerdo de Nueva Imperial en diciembre de 1989. Una vez en la Presidencia, el 30 de mayo se constituyó la

Reformas constitucionales acordadas y aprobadas por el Senado en octubre de 2004

TABLA 6

Norma vigente	El Presidente	Podía ser convocado por los	Hoy tiene 48	Tiene 7	Cumplen el	Binominal,	6 años sin
antes del	requería la	comandantes en jefe. Desig-	miembros:	miembros, 2	rol de ser los	exclusivos	reelección
Acuerdo	autorización	del Cosená	9 designados	designados	garantes de la	en la	Constitución
	para poder	al Presidente	decreta los	Cosená	institucionalidad		
	removerlos	estados de excepción					
Norma	Mandatario	Sólo lo pueden convocar el	A partir del	Sube a 9	Ese rol es	Se trasladada	6 o 4 años
reformada por	los puede	Presidente, el presidente del	11 de marzo	integrantes,	asumido por	la discusión	sin reelección.
el Acuerdo	destituir con	Senado o el de la Corte	de 2006 se	nombrados	todas las	a la ley de	Proyecto en
	un decreto	Suprema. Queda como un	eliminan	sólo por la	autoridades	votaciones,	discusión
	fundado	órgano exclusivamente asesor	designados y	Corte Suprema,	públicas	manteniendo	
	informando al	en materias de seguridad	vitalicios.	el Presidente	un quórum	de 3/5 para	modificarlo
	Senado, pero	nacional, sin capacidad	Queda con	y el Senado			
	sin pedir	resolutiva	38 senadores				
	autorización al	Cosená					

Fuente: Elaboración del autor con base en informaciones del Gobierno de Chile y el Senado. Publicadas en la prensa chilena (Diario "La Tercera", 7 y 8 de octubre de 2004).

* COSENA (Consejo de Seguridad Nacional).

Comisión Especial de Pueblos Indígenas, con la participación de representantes de las organizaciones indígenas y del Gobierno, con el objetivo de elaborar una nueva legislación que reconociera institucionalmente los derechos de los pueblos originarios. Tras un amplio proceso participativo, en enero de 1991 tuvo lugar en Temuco el Congreso Nacional Indígena, en donde unos 5000 delegados de los congresos regionales entregaron al Presidente Aylwin los resultados de ese proceso de consulta. Se inició así un proceso que condujo, al término del mandato de Aylwin, a la aprobación de una Ley de protección, fomento y desarrollo de los indígenas, incluyendo la creación de una Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI). Ese dispositivo legal y administrativo constituye, a la vez, un reconocimiento explícito de la cultura indígena y la puesta en marcha de políticas de desarrollo centradas en el acceso a la tierra y al agua a partir de un sistema de gobierno comunitario. La acción de CONADI, en colaboración con el Banco Interamericano de Desarrollo y con el conjunto de las administraciones del gobierno chileno, se sistematizó a través del Programa Orígenes como el Programa de Desarrollo Integral de Comunidades Indígenas. El programa incluye el desarrollo educativo y cultural, el desarrollo productivo, el desarrollo de salud intercultural (con fortalecimiento de la medicina indígena) y el desarrollo institucional y comunitario, con énfasis en formas de autogobierno. Los proyectos se concentraron en seis "áreas de desarrollo indígena" de las cuales tres corresponden al territorio mapuche. Cabe destacar la

formación de un millar de profesores bilingües para enseñar en las escuelas de las regiones con mayor población indígena. Es significativa también la política de protección de las tierras indígenas y el traspaso de tierras fiscales a los indígenas, la adquisición de predios en conflicto y el programa de subsidio de tierras para los indígenas. Desde 1995 al 2000 se inscribieron en el registro de Tierras Indígenas casi 300.000 hectáreas en territorio mapuche, asegurando así la aplicación de los derechos especiales reconocidos a estas tierras, que incluyen la exención del pago de impuestos y la inalienabilidad de la propiedad. Los predios adquiridos para resolver demandas conflictivas representan más de 30.000 hectáreas y su distribución benefició a casi tres mil familias indígenas. En su conjunto, a través de diversos programas públicos se incorporaron al patrimonio indígena más de 170.000 hectáreas, beneficiando a unas 9.000 familias, la mayoría de ellas en las comunidades mapuches. En el campo educativo, el programa aumentó el número de becas para estudiantes indígenas, de 5000 en 1994 a 25000 en 2001. Y en el ámbito cultural cabe mencionar una medida, más simbólica que efectiva, como fue declarar, en 2002, el mapudungun como lengua oficial en La Araucanía, a pesar de lo limitado de su uso en la población. En fin, en diciembre 2000 se introdujo una reforma del proceso penal para adaptarlo a las tradiciones mapuches de justicia comunitaria en La Araucanía y se creó una oficina especial para la administración de justicia a imputados mapuches en la región. Se trata de una innovación administrativa que

trata de avanzar en el reconocimiento de la especificidad cultural en el sistema general del Estado de derecho. En continuidad con esta serie de iniciativas políticas, en 2004 estaba en proceso de aprobación en el Senado chileno la ratificación del Convenio de la Oficina Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en países independientes, lo que significa la asunción por parte de la administración chilena de los principios de reconocimiento de la cultura y los derechos de los indígenas establecidos por Naciones Unidas.

En suma, el Estado democrático chileno asumió, desde el principio de la transición, el reconocimiento de la pluralidad cultural de Chile y afirmó los derechos de los pueblos originarios, traduciendo esa actitud en una serie de medidas legislativas y simbólicas, así como en programas de desarrollo orientados hacia las minorías indígenas. Desde luego, dicho reconocimiento no resuelve los problemas estructurales de marginación y discriminación que sufren las comunidades indígenas como resultado de una larga historia de expoliación y negación de sus derechos. Pero la apertura de cauces institucionales de participación y la valoración y protección de las identidades de los pueblos originarios ha desactivado un conflicto potencialmente explosivo y ha situado a la democracia chilena en un proceso de reconocimiento gradual de la pluralidad cultural de la nación chilena.

LA RECONSTRUCCIÓN DE LA IDENTIDAD NACIONAL CHILENA EN TORNO A UNA IDENTIDAD-PROYECTO

En el proceso de cambio multidimensional que he intentado documentar, el Estado chileno de los gobiernos de la Concertación consiguió restablecer la legitimidad democrática y su legitimidad como protector/redistribuidor junto a la legitimidad del mercado como principio de cohesión de la sociedad, frente al poder dinámico pero disgregador de la identidad individualista y de la ideología del mercado. Pero no es tan fácil restablecer la identidad nacional como identidad colectiva una vez que los principios de individuación han operado a gran escala. Y sin embargo, es esencial la existencia de una identidad colectiva como principio de cohesión en el momento en que Chile se enfrenta a una etapa decisiva de acción en la globalización: nueva competitividad, transición informacional y articulación en Estadored en el marco de nuevos acuerdos transnacionales en los que el Estado para no perder su anclaje en Chile necesita saber que representa a algo más que una suma de individuos, colectivamente distintos de Argentina o Estados Unidos.

Tal vez lo que se plantea es la reconstrucción de un nuevo tipo de identidad nacional. En mis análisis comparados sobre la identidad he distinguido, a partir de la observación, entre identidades legitimadoras, identidades de resistencia e identidades-proyecto (Castells, 2003). La identidad

legitimadora que proporciona la ideología del mercado a través de la práctica del consumo y la mejora de las condiciones de vida parece haberse agotado como principio de sentido para el conjunto de la población. La identidad de resistencia no abarca a una sociedad como la chilena que no se percibe como amenazada. Por tanto, la identidad colectiva posible en torno a la cual Chile podría re-agregarse y movilizarse como comunidad es una identidad-proyecto, una identidad a partir de una práctica común hacia un objetivo compartido. ¿Puede Chile albergar una identidad proyecto colectiva, más allá del bienestar individual de cada familia a través del mercado? Todo depende del proyecto y de la forma de construcción del proyecto. Es un proceso, no una ideología. El Informe de Desarrollo Humano de Chile del 2002 señala la importancia de los "sueños" para los chilenos. Pero, según los estudios en los que se basa el Informe, no son sueños imaginarios, sino construidos y proyectados mediante conversaciones y mediante prácticas compartidas. ¿Qué prácticas compartidas podrían engendrar sueños con capacidad de proyecto colectivo?

Observando la experiencia internacional de experiencias de desarrollo construidas en torno a proyectos colectivos, casos como los de Irlanda o Finlandia en los noventa vienen a la mente. En ambos casos hay una fuerte afirmación de identidad nacional y cultural y una voluntad de prosperar en la globalización manteniendo la solidaridad interna en la comunidad nacional. En el caso de Finlandia se afirma también el proyecto-mito de

constituirse en la más avanzada sociedad de la información en el mundo, superando incluso a Suecia que fue su dominador colonial durante siglos. Y de hecho, tal y como señalé anteriormente, en base a los indicadores habituales y al ranking de Naciones Unidas, Finlandia es la sociedad de la información más avanzada, por encima de Estados Unidos. Pero lo que es relevante para el argumento aquí presentado es que ese desarrollo tecnológico y económico se planteó como afirmación de una identidad cultural y nacional en un mundo globalizado. En cierto modo, la crisis estructural que sufrió Finlandia en 1991-93 fue el acicate para encontrar un proyecto nacional movilizador en el que la identidad colectiva se transformara en proyecto. No se trata aquí de proponer a Finlandia o a Irlanda como modelo. Cada país tiene su trayectoria histórica específica. Pero la referencia finlandesa me sirve como ilustración del concepto de movilización identitaria en torno a un proyecto colectivo de futuro, enraizado en la historia, pero no dependiente de sus esencias.

¿Chile sociedad de la información? De hecho, sería un componente fundamental de la nueva fase del modelo democrático de desarrollo, en la medida en que el desarrollo chileno tiene que redefinir sus estrategias para ser competitivo en el nuevo contexto de la economía informacional global. Pero el desarrollo informacional es social por definición porque es desarrollo de las mentes, de las relaciones sociales y de las instituciones de aprendizaje, creación e innovación. De ahí, el círculo virtuoso entre desarrollo y bienestar, mediante

la relación entre innovación, tecnología y economía. Pero si la gente no está interesada, si no es su proyecto, la sociedad de la información aparece simplemente como propaganda tecnocrática de modernidad. En cambio, el proyecto informacional consiste en adaptar la tecnología para los usos, intereses y valores de la sociedad y de cada uno de sus individuos.

Así, tal vez la movilización colectiva de Chile en función de una identidad-proyecto podría construirse en torno al desarrollo de una sociedad de la información con características propias. Pero no como proyecto tecnológico, sino como articulación entre modernidad tecnológica, prosperidad material, creatividad cultural, programa educativo, pluralismo identitario y superación del aislamiento social y cultural, un tanto provinciano en el que aún vive Chile. Ahora bien, no hay proyecto sin sujeto. ¿Cuál es ese sujeto en las condiciones actuales de Chile? ¿Y cuáles son los retos a los que tiene que enfrentarse?

CONCLUSIÓN:

EL SUJETO DE LA NUEVA TRANSICIÓN CHILENA

Con sangre, sudor, lágrimas y paciencia, mucha paciencia, Chile ha consolidado su crecimiento económico, reducido su pobreza, aliviado su desigualdad, modernizado su infraestructura, incrementado su educación, mejorado sustancialmente sus condiciones de vida, afirmado el respeto a los derechos humanos, recuperado su memoria histórica y establecido la democracia política y el diálogo social. Este enorme esfuerzo, en poco más de una década, contrasta con la andadura incierta de una América Latina en donde países y economías caminan al borde de la crisis estructural, la explosión social y la desestabilización política. El fundamento de este modelo chileno democrático de desarrollo es político y cultural más que económico. Es la capacidad de los actores políticos para reconstruir la legitimidad y la gobernabilidad del Estado con respecto a los distintos sectores de la sociedad que ha hecho posible tomar una serie de medidas económicas, sociales e institucionales que han permitido gestionar la transición hacia aguas más tranquilas. Hoy día, en Chile y en el mundo, la democracia es un factor esencial